Bogotá D.C., 22 de abril de 2025

Señora
ANA LORENA DELGADILLO
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI)
Consejo de Derechos Humanos
Organización de las Naciones Unidas

Asunto: Crímenes cometidos contra el medio ambiente. Tratamiento jurídico en el Caso 05 de la Jurisdicción Especial para la Paz

Respetada señora Delgadillo:

Por medio del presente remitimos la respuesta del despacho que dirijo en la Jurisdicción Especial para la Paz al llamado a contribuciones para la construcción de un "Informe temático sobre desapariciones forzadas en el contexto de la defensa de la tierra, el medio ambiente y los recursos naturales" por el Grupo de Trabajo que usted integra. Esperamos que los aportes enviados sean útiles para la confección del informe. Quedamos a su disposición para lo que sea necesario.

Cordialmente,

RAÚL EDUARDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Magistrado
Tribunal para la Paz
Jurisdicción Especial para la Paz

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

[ENGLISH STARTING FROM PAGE 39]

Los crímenes cometidos contra el medio ambiente en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. Calificación jurídica de la destrucción de la madre naturaleza en el Caso 05 de la JEP.

Raúl Eduardo Sánchez Sánchez
Magistrado del Tribunal para la Paz
Jurisdicción Especial para la Paz

Carlos Guillermo Castro Cuenca
Magistrado Auxiliar

Carlos Fonseca Sánchez
Magistrado Auxiliar

I. Introducción

El presente documento tiene como objetivo mostrar los aportes que se han hecho desde el Caso 05 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz al debate sobre si la destrucción del medio ambiente puede catalogarse como un crimen internacional. Con el mismo queremos aportar a la construcción del Informe temático sobre desapariciones forzadas en el contexto de la defensa de la tierra, el medio ambiente y los recursos naturales realizado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En primer lugar, se exponen las razones por las cuales consideramos en el marco del Caso 05 que la destrucción del medio ambiente puede considerarse un crimen de lesa humanidad. En segundo lugar, nos referimos a la posibilidad de considerar estos crímenes como crímenes de guerra. En tercer lugar, señalamos los puntos de contacto que existen entre la conducta de desaparición forzada y la destrucción del medio ambiente.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

En el marco del Caso 05 se han producido dos autos de determinación de hechos y conductas, en los cuales se les imputaron a 21 personas los crímenes de lesa humanidad de otros actos inhumanos de carácter similar y los crímenes de guerra de destrucción de bienes del adversario y destrucción de bienes culturales y de lugares de culto por hechos relacionados con la destrucción de la madre naturaleza.

Por medio del Auto No. 226 del 11 de julio de 2023, la Sala de Reconocimiento en el Caso 05 decidió acreditar al río Cauca como víctima del conflicto armado colombiano, sobre todo por el daño causado debido a la instrumentalización del río como medio para la desaparición forzada. El 28 de marzo de 2025, las Subsalas H y N de la Sala de Reconocimiento de la JEP emitieron el Auto No. 001 de 2025, en el cual se llamó a versión voluntaria a 5 ex integrantes de la Fuerza Pública por hechos relacionados con la desaparición forzada y la destrucción de la madre naturaleza. El tercer apartado de este documento resume el análisis de la Sala en esta última decisión.

II. La destrucción de la madre naturaleza como un crimen de lesa humanidad de otros actos inhumanos

En el apartado G.1.3.5., párrafos 1121 y siguientes, del segundo Auto de Determinación de Hechos del Caso 05 de la Sala de Reconocimiento se exponen las razones por las cuales la Sala consideró que la destrucción de la naturaleza constituye el crimen de otros actos inhumanos de carácter similar.[1]

La Sala recordó que, de conformidad con el artículo 7(1)(k) del Estatuto de Roma, son crímenes de lesa humanidad los "*otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física*".[2] Adicionalmente, de conformidad con el documento de Elementos de los Crímenes de la CPI, para atribuir esta conducta es necesario verificar la existencia de los siguientes elementos: (i) que el autor haya causado mediante un acto inhumano graves sufrimientos o atentado gravemente contra la integridad física o la salud mental o física; (ii) que el acto haya tenido un carácter similar a cualquier otro de los actos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto; (iii) que el autor haya sido consciente de las

[1] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párrs. 1121-1121.21.
[2] Ídem, párr. 1008.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

circunstancias de hecho que determinaban el carácter del acto; (iv) que la conducta se haya cometido como parte de un ataque sistemático o generalizado dirigido contra una población civil; y, (v) que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de este tipo.[3]

La Sala de Reconocimiento acogió lo señalado por la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI en el caso Katanga, cuando afirmó que una interpretación del artículo 7(1)(k) que sea acorde con el principio de *nullum crimen sine lege* del artículo 22 ER implica que 'otros actos inhumanos' deben ser considerados como graves violaciones del derecho internacional consuetudinario y de los derechos básicos de los seres humanos provenientes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.[4]

La Sala consideró que, para calificar las conductas que destruyen la madre tierra como un acto inhumano como crimen de lesa humanidad es necesario tener en cuenta que las características particulares de las víctimas individuales y/o colectivas (indígenas, afrodescendientes, campesinos) pueden implicar que, en virtud de su especial relacionamiento con la naturaleza, su destrucción les pueda haber causado inmensos dolores o sufrimientos.[5]

La Sala de Reconocimiento recordó que la CPI en el caso Katanga, acogiendo lo señalado por la Sala de Apelaciones del TPIY en el Caso Vasiljević, indicó que, para establecer si se está ante un acto inhumano, se pueden tener en cuenta las circunstancias personales de las víctimas, como su edad, sexo, salud, así como los efectos físicos, morales y mentales que el acto genera en las víctimas concretas.[6] En este sentido, la Sala de Reconocimiento afirmó que las afectaciones a la naturaleza, especialmente en los territorios de los pueblos indígenas y afrocolombianos, no solamente tienen impactos en el territorio y las fuentes

---

[3] CPI, Elementos de los Crímenes, artículo 7(1)(k). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/A851490E-6514-4E91-BD45-AD9A216CF47E/283786/ElementsOfCrimesSPAWeb.pdf

[4] TPIY, *Fiscalía v. Kupreškić et al*, Trial Judgment, IT-95-16-T, 14 enero 2000, párr. 566; TPIY, *Fiscalía v. Stakić*, Trial Judgment, IT-97-24-T, 31 julio 2003, párr. 721; CPI, *Fiscalía v. Germain Katanga*, Decisión de Confirmación de Cargos, Sala de Cuestiones Preliminares I, ICC-01/04-01/07, 30 septiembre 2008, párr. 448.

[5] Ídem, párr. 1121.

[6] Ídem, párr. 1121.1; CPI, *The Prosecutor v. Katanga & Ngudjolo*, Decisión de confirmación de cargos, ICC-01/04-01/07-717, 01 de octubre de 2008, párr. 449. Citando TPIY, *The Prosecutor v Vasiljević*, Caso No. 1T-98-32-A. Sentencia de Apelación, 25 de febrero de 2004, párr. 165.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

hídricas, sino que también tuvieron un efecto inmediato en la vida espiritual de los pueblos étnicos, así como en la salud mental y la identidad cultural de sus miembros. Esto en tanto los integrantes de los pueblos étnicos acreditados como víctimas en el Caso 05 de la Sala de Reconocimiento tienen, como parte de su cultura, una relación espiritual con la tierra y su bienestar.

Para ilustrar la relación que existe entre los pueblos indígenas y afrodescendientes con su territorio, la Sala de Reconocimiento también consideró pertinentes los *"Principios sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados"*,[7] acogidos mediante Resolución A/RES/77/104 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas del 7 de diciembre de 2022, los cuales tienen en cuenta el especial impacto que tiene el conflicto armado frente a la naturaleza en las tierras o territorios en que habiten Pueblos Indígenas:

> "Principio 5, Protección del medio ambiente de los Pueblos Indígenas
> 1. Los Estados, las organizaciones internacionales y otros actores pertinentes adoptarán medidas apropiadas, en caso de conflicto armado, para proteger el medio ambiente de las tierras y los territorios en que habiten Pueblos Indígenas o que sean utilizados tradicionalmente por estos.
> 2. Cuando un conflicto armado haya afectado de manera adversa al medio ambiente de tierras o territorios en que habiten Pueblos Indígenas o que sean utilizados tradicionalmente por estos, los Estados mantendrán consultas y una cooperación apropiadas y efectivas con los Pueblos Indígenas en cuestión, mediante procedimientos apropiados y, en particular, por conducto de instituciones que los representen, con el fin de adoptar medidas de reparación".[8]

Para la Sala también fue relevante el Convenio 169 de la OIT[9] sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual hace mención expresa a los derechos de los pueblos indígenas respecto

[7] Ídem, párr. 1121.2.
[8] Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución A/RES/77/104, 7 de diciembre de 2022, Principio 5.
[9] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párrs. 1121.3

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

de sus tierras.[10] El artículo 7 señala que los pueblos tienen derecho a decidir sobre las actividades de desarrollo que se desarrollan en sus territorios y sus creencias y bienestar espiritual deben ser tenidos en cuenta para la elaboración de los planes de desarrollo. Asimismo, el artículo 13 del Convenio reconoce "*la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación*"[11].

Posteriormente, la Sala se refirió a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas[12], la cual en varios de sus artículos reconoce expresamente el derecho de los pueblos indígenas y tribales a conservar su relación con la naturaleza. En este sentido, el artículo 29 del Convenio señala que *"los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente"*[13], lo cual incluye el derecho expreso a mantener y fortalecer su relación espiritual con la naturaleza, tal como señala su artículo 25:

> "Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras"[14].

El Convenio 169 de la OIT destaca asimismo la necesidad de reconocer la importancia de la relación entre las comunidades indígenas y sus territorios:

> "Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o

[10] Artículo 15.1. "Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos".
[11] OIT, Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 1989, Artículo 13.
[12] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párrs. 1121.4.
[13] ONU, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículo 29.
[14] Ídem, Artículo 25.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

> territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación"[15].

Ese derecho de los pueblos indígenas y tribales con respecto a la naturaleza, reconocido por la Declaración, incluye a su vez un derecho autónomo a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente:

> "Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos"[16].

La imposibilidad de llevar a cabo sus ceremonias religiosas termina afectando estos derechos, así como también la salud espiritual de los pueblos que incluye además la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital:

> "1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud"[17].

Esta situación afecta especialmente a los menores frente a los cuales la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no solo incluye su derecho al desarrollo físico y mental, sino también espiritual:

> "Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación del niño, o que pueda ser perjudicial para la salud

---

[15] OIT, Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 1989, Artículo 13, párrafo 1.
[16] ONU, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículo 12, numeral 1.
[17] Ídem, Art. 24.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

> o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño, teniendo en cuenta su especial vul-nerabilidad y la importancia de la educación para el pleno ejercicio de sus derechos"[18].

En lo relacionado con los pueblos afrodescendientes, la Sala tuvo en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha ampliado la protección de las comunidades afrodescendientes[19], asimilando su protección a la de los pueblos indígenas y tribales y cobijándolos con todas las medidas que frente a los mismos contempla el Convenio 169 de la OIT[20], lo cual también fue reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-295 de 2019, donde se establece que el Pueblo afrocolombiano es un pueblo tribal cobijado por el Convenio 169.[21]

Por otra parte, la Sala de Reconocimiento se refirió al Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra Nicaragua, surtido ante la Corte IDH, en el cual se reconoció que los pueblos indígenas tienen vínculos estrechos con sus territorios y que dichos vínculos son fundamentales para su cultura, vida espiritual, la integridad colectiva y su supervivencia económica.[22] Esta postura fue reiterada por la Corte IDH en el Caso Masacre Plan de Sánchez y en el Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay.[23] En el último de estos casos la Corte IDH afirmó:

> "131. Haciendo uso de los criterios señalados, este Tribunal ha resaltado que la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia económica y su preservación y transmisión a las generaciones futuras.
> […]

---

[18] Artículo 17, numeral 2º.

[19] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párrs. 1121.13.

[20] Corte IDH, *Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam*, Sentencia del 28 de noviembre, 2007; Corte IDH, *Caso* de la Comunidad *Moiwana Vs. Suriname*, Sentencia de 15 de junio, 2005.

[21] CC. Sentencia C-295 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.

[22] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párrs. 1121.6.

[23] Corte IDH. *Caso Masacre Plan de Sánchez*. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116, párr. 85; *Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 147.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

> 135. La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural.".[24]

Refiriéndose al artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte IDH determinó que cuando se impide a las comunidades indígenas disfrutar de manera plena de sus bienes colectivos, dentro de los cuales se incluye el derecho al goce efectivo a la propiedad, se afecta su cultura y prácticas tradicionales:

> "147. Al desconocerse el derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas sobre sus territorios, se podría estar afectando otros derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros.
> …
> 154. La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores. En función de su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, los miembros de las comunidades indígenas transmiten de generación en generación este patrimonio cultural inmaterial, que es recreado constantemente por los miembros de las comunidades y grupos indígenas".[25]

Adicionalmente, la Sala de Reconocimiento consideró relevante[26] lo dicho por la Corte Africana de Derechos Humanos en el Caso *African Commission on Human and Peoples' Rights v. Republic of Kenya*, en el cual concluyó que el desplazamiento forzado cometido

---

[24] Corte IDH. *Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párrs. 131 y 135.
[25] Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párrs. 147 y 154.
[26] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párrs. 1121.8.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

en contra del pueblo *Mau Ogiek* constituyó una violación a sus derechos humanos, como el derecho a la vida y a la integridad y el derecho a la libertad de culto, pues se vulneró la dependencia de este pueblo respecto de su territorio.[27] La Corte resaltó la vulneración que existe a la libertad de culto cuando se impide el acceso de los pueblos a sus territorios:

> "El Tribunal señala que, en el contexto de las sociedades tradicionales, en las que a menudo no existen instituciones religiosas formales, la práctica y la profesión de la religión suelen estar inextricablemente vinculadas a la tierra y al medio ambiente. En las sociedades indígenas en particular, la libertad de culto y de participar en ceremonias religiosas depende del acceso a la tierra y al entorno natural. Cualquier impedimento o interferencia en el acceso al entorno natural, incluida la tierra, limita gravemente su capacidad para celebrar o participar en rituales religiosos, con una repercusión considerable en el disfrute de su libertad de culto"[28].

En Colombia, las normas reconocen la profunda interrelación que existe entre los pueblos indígenas y su territorio. El Decreto Ley 4633 de 2011 establece en su artículo 3º la definición de víctimas incluyendo a la naturaleza:

> "Artículo 3º. Víctimas. Para los efectos del presente decreto, se consideran víctimas a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos y a sus integrantes individualmente considerados que hayan sufrido daños como consecuencia de violaciones graves y manifiestas de normas internacionales de derechos humanos, derechos fundamentales y colectivos, crímenes de lesa humanidad o infracciones al derecho internacional humanitario por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985 y que guarden relación con factores subyacentes y vinculados al conflicto armado interno.
> […] Para los pueblos indígenas el territorio es víctima, teniendo en cuenta su cosmovisión y el vínculo especial y colectivo que los une con la madre tierra. Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá que los titulares de derechos

[27] Corte Africana de Derechos Humanos, *African Commission on Human and Peoples' Rights v. Republic of Kenya, App. No. 006/2012*, Sentencia, 26 de mayo de 2017, párr. 160. Citado por Matthew Gillett,
[28] Corte Africana de Derechos Humanos, *African Commission on Human and Peoples' Rights v. Republic of Kenya, App. No. 006/2012*, Sentencia, 26 de mayo de 2017, párr. 164.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

> en el marco del presente decreto son los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes individualmente considerados"[29].

Para la calificación jurídica de las conductas que afectan al medio ambiente como un acto inhumano, la Sala de Reconocimiento valoró lo dicho por las organizaciones indígenas[30], las cuales han mencionado que se impidió *"el acceso a áreas de importancia comunitaria, ecológica, económica y cultural como: acueductos, áreas de siembra, ojos de agua, ríos, bosques, escuelas, sitios sagrados como lagunas, montañas*[31]*"*[32], lo cual afectó gravemente la espirituralidad de los pueblos, pues los páramos:

> "constituyen uno de los sitios sagrados más importantes para el Pueblo Nasa, son ksxa'w yat ("casa de los espíritus"), pues es donde los kiwe thë'j ("sabedores ancestrales" o "médicos tradicionales") encuentran las plantas para elaboración de remedios, así como también es el espacio donde se concentran para dialogar con los espíritus que habitan los tres espacios que mencionamos en el apartado anterior"[33].

La Sala de Reconocimiento, en aplicación de los enfoques étnico y territorial, tuvo en cuenta las observaciones presentadas por la representación de las víctimas, en las cuales explicaron los graves sufrimientos causados a las comunidades del Pueblo Nasa[34]:

(i) No se podían hacer ofrendas ni rituales en los páramos[35]. En este sentido, la destrucción de los espacios sagrados pone en riesgo la práctica espiritual[36]. En los sitios sagrado se hacían las armonizaciones, ahora no se puede[37]. En este sentido,

---

[29] Decreto Ley 4633 de 2011.
[30] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párrs. 1121.14.
[31] Personería Municipal de Jambaló.
[32] Observaciones presentadas por los apoderados de las organizaciones indígenas, pág. 92.
[33] Observaciones presentadas por las Autoridades Ancestrales, pág. 18.
[34] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párrs. 1121.15-1121.17.
[35] Observaciones presentadas por las Autoridades Ancestrales, pág. 19.
[36] Observaciones presentadas por los apoderados de las organizaciones indígenas, pág. 46.
[37] Observaciones presentadas por los representantes de las víctimas colectivas indígenas, pág. 176.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

ello implicó la vulneración de poder acceder a lugares sagrados y en consecuencia la libertad religiosa como derecho colectivo[38].

(ii) Las fosas comunes, las minas antipersonal, las municiones sin explotar y los derrumbes provocados por bombardeos son graves desarmonías que atentan contra la integridad del Pueblo Nasa en general, pues se está produciendo la destrucción de una casa de los seres espirituales[39].

(iii) Si no se accede a los sitios sagrados, no hay manera de armonizar el territorio[40], por lo cual no se pudo realizar un trabajo armónico sobre la tierra. Los combates y campos minados impidieron el acceso a tierras aprovechables, afectando el sustento de varias familias. Los ciclos de roza, siembra y cosecha también se vieron interrumpidos:

> "Por los combates y los campos minados muchas tierras aprovechables para el sustento familiar quedaron sin poderse trabajar, así como no fue posible realizar los trabajos espirituales de protección que realizan las familias sobre sus tierras. Por la intervención permanente de los grupos armados los animales de caza se escondieron. Por las dificultades para comunicarse entre comunidades se perdieron semillas nativas. Los ciclos de roza, siembra y cosecha se vieron interrumpidos por las constantes intervenciones armadas, impidiéndonos seguir el camino de la luna para nuestras actividades agrícolas. En general, se produjo un encadenamiento de afectaciones que impidió el trabajo armónico de la tierra y una creciente dependencia de las instituciones del Estado para la supervivencia"[41].

(iv) Al dejar enterradas a personas asesinadas en sitios sagrados se está sembrando la desarmonía desde donde se encontraba precisamente la fuente del bienestar para todos los seres del territorio[42].

---

[38] Observaciones presentadas por las víctimas y autoridades de las comunidades negras del Norte del Cauca y Sur del Valle del Cauca representadas por la Agencia Afrocolombiana Hileros, pág. 30.
[39] Observaciones presentadas por las Autoridades Ancestrales, pág. 19.
[40] Observaciones Autoridades Ancestrales al Auto 01 del 2023 ADHC Caso 005; pág. 20.
[41] Observaciones Autoridades Ancestrales al Auto 01 del 2023 ADHC Caso 005; pág. 21.
[42] Observaciones presentadas por las Autoridades Ancestrales, pág. 19.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

(vi) Se perdieron semillas nativas[43]. Asimismo, las víctimas han mencionado que también se imposibilitó acceder a sus plantas medicinales [44].

La Sala también se refirió a la interrelación espiritual que existe entre el pueblo Nasa y su territorio[45], resumido por las propias víctimas de la siguiente manera:

> "Esta, es una relación inherente con la naturaleza, por eso el Nasa siente sus tristezas, sus dolencias, sus alegrías. A su vez la madre tierra siente los sufrimientos, miedos, dolores y alegría de la comunidad"[46].

En sus Observaciones la Corporación Afrocolombiana Hileros, organización que representa a la mayoría de los Consejos Comunitarios afrodescendientes reconocidos como víctimas en el Caso 05, mencionó la grave afectación que sintieron al no poder acceder a lugares sagrados que se encuentran en la naturaleza y que vulneran también la libertad religiosa[47]:

> "Esta práctica para el caso de las comunidades étnicas implicó la vulneración de poder acceder a lugares sagrados y en consecuencia la libertad religiosa como derecho colectivo. Los impactos de esta práctica se extienden en la vulneración del derecho a la familia, al desarrollo económico y en sí, a la desaparición de prácticas económicas tradicionales"[48].

---

[43] Observaciones presentadas por las Autoridades Ancestrales, pág. 21.

[44] Tercera minga de pensamiento alrededor del fogón para la construcción de observaciones al primer ADHC, desarrollada en la Tulpa de CRIC, Territorio Sat Tama Kiwe - Resguardo Kweth ki´na las Mercedes, del municipio de Caldono, fecha 8 y 9 de mayo de 2023. Documento de relatoría, pág. 27.

[45] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1121.16.

[46] Observaciones presentadas por los apoderados de las organizaciones indígenas, pág. 89.

[47] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1121.17.

[48] Observaciones de la Corporación Afrocolombiana Hileros al Auto 01 del 2023, pág. 30: "De los municipios priorizados en el caso, para las comunidades afrodescendientes, según la información allegada en los informes presentados a la Jurisdicción, el patrón de confinamiento se presentó por parte de la CM JA en los municipios de Puerto Tejada, Suarez, Padilla, Caloto y Buenos Aires. Parte de las dinámicas utilizadas para ejercer control territorial por medio del confinamiento, consistían en la imposición de horarios, prohibición o imposibilidad de asistir a lugares religiosos o esenciales para la comunidad como los ríos. Otra de las estrategias utilizadas, fue la utilización de MAP en el territorio".

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

La Sala de Reconocimiento destacó que los propios comparecientes reconocieron que se presentaron *"rupturas en los relacionamientos con lugares sagrados y el libre tránsito por ellos"*[49]. Asimismo, ello también se afirmó en las versiones voluntarias del Caso 05:

> "**Compareciente Heriberto Reina Suaza**: "Como tercero al mando de la [Columna Móvil Jacobo Arenas] entre 1998 a 2012, reconozco que la presencia de la estructura en territorio tuvo impactos psicoespirituales para las comunidades indígenas y afrodescendientes y que nuestra presencia y uso de explosivos representa violencia, desarmonía y sufrimiento para el territorio al enterrar explosivos, cavar trincheras y asentar nuestros campamentos y enterrar cuerpos de informantes y combatientes fusilados; para las comunidades indígenas y afrodescendientes representó rupturas en los relacionamientos con lugares sagrados y el libre tránsito por ellos"[50].

Adicionalmente, en el curso de la investigación del Caso 05 un compareciente señaló que las FARC-EP era responsable del confinamiento de la población nasa debido al uso de artefactos explosivos que destruían la naturaleza y generaban un miedo a la población, por el riesgo a su detonación. Entre los efectos reconoció que las minas antipersonal "*se enterraban en territorios ancestrales y no se permitía el paso a las lagunas, tan importantes para la cosmovisión del pueblo indígena Nasa*".

La Sala concluyó que a la destrucción del medio ambiente derivado del uso de explosivos indiscriminados como las minas antipersonal o los tatucos hay que sumar la explotación de la naturaleza que atenta contra la cosmovisión de los pueblos, cuando se hace en su territorio. En estos casos, la minería ilegal y los cultivos ilícitos generan grandes sufrimientos mentales en los pueblos. Estas prácticas, cuando encuentran oposición de los pueblos, son respondidas con amenazas, desplazamientos forzados y otros crímenes violentos.[51]

---

[49] Observaciones de la defensa de ex combatientes, pág. 215; Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1121.18.

[50] Observaciones de la defensa de ex combatientes, pág. 215.

[51] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1121.19.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

En lo relacionado con el elemento subjetivo requerido para la comisión del crimen de otros actos inhumanos, la Sala recordó lo dicho por el TPIY en los casos del Fiscal contra Krnojelac y el Fiscal contra Blagojević y Jokić, en ellos cuales se señaló que los actos inhumanos podrían cometerse por acción u omisión, así como el nivel de conocimiento e intención requeridos para cometer este tipo de actos[52]:

> "Se requiere que el autor, en el momento de la acción u omisión, tuviera la intención de infligir graves sufrimientos físicos o mentales o de cometer un atentado grave contra la dignidad humana de la(s) víctima(s), o que el autor supiera que su acción u omisión podía causar tales sufrimientos o constituir un atentado grave contra la dignidad humana de la(s) víctima(s) y, con ese conocimiento, actuó u omitió actuar"[53].

Por lo anterior, la Sala de Reconocimiento concluyó que en el Caso 05, los comparecientes sabían que su acción u omisión podía causar diversos sufrimientos o constituir un atentado grave contra la dignidad humana de la(s) víctima(s) y, con ese conocimiento, actuó u omitió actuar[54].

Con las anteriores consideraciones, la Sala de Reconocimiento concluyó que las prácticas de las FARC-EP que destruían el medio ambiente generaban, simultáneamente una afectación a la integridad mental de los pueblos étnicos de la zona. La conclusión se deriva de una comprensión completa del vínculo intelectual, moral y cultural que existe entre los pueblos y su territorio. Así, un daño a la naturaleza implica un atentado a la existencia misma de los pueblos. Los ex combatientes de las FARC-EP conocían de la cosmovisión de los pueblos y la importancia que tiene la naturaleza y el territorio para los mismos.

Los atentados graves dirigidos contra la integridad mental de los pueblos indígenas y afrodescendientes del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca se derivaron de: (i) las

---

[52] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1121.20.

[53]Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1121.21; TPIY, *The Prosecutor v. Krnojelac*, Caso No. IT-97-25-T, Sentencia de Primera Instancia, párr. 132; TPIY, *The Prosecutor v Blagojević and Jokić*, Caso No. IT-02-60-T, Sentencia de Primera Instancia, 17 de enero de 2005, párr. 624.

[54]TPIY, The Prosecutor v. Krnojelac, Caso No., párr. 132; TPIY, *The Prosecutor v Blagojević and Jokić*, Caso No. IT-02-60-T, Sentencia de Primera Instancia, 17 de enero de 2005, párr. 624.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

afectaciones al territorio con minas antipersonal, explosivos detonados y sin explotar y ataques en los sitios sagrados de las comunidades; (ii) las afectaciones a través de la minería ilegal y la reconversión agrícola para la destinación de producción de cultivos ilícitos.

La decisión de determinación de hechos hace una relación de los hechos denunciados por las comunidades:[55]

1. La afectación a los páramos de Miranda y Florida, en los cuales los grupos armados talaron indiscriminadamente la vegetación, detruyeron el territorio con tatucos y minas antipersonal
2. En el resguardo de Honduras las FARC-EP dejaron sobre el territorio municiones detonadas y sin explotar, así como artefectos explosivos improvisados.
3. Minado encontrado en el año 2021 en el sector La María Resguardo La Aguada en San Antonio de Caldono.
4. Artefactos explosivos improvisados dejados en el Resguardo indígena de Honduras. Fueron encontrados 5 elementos con cableado, más otras cargas en el mismo sector.
5. Destrucción indiscriminada de la naturaleza causadas en Morales por las FARC-EP con el uso de artefatos explosivos improvisados.
6. Abandono de un artfectado explosivo improvisado el 30 de julio de 2012 en el sectro de El Tablón, Corinto, Cauca.
7. Abandono de municiones y desechos de guerra en el Resguardo de Huellas, Caloto, Cauca, que afectaba los abrevaderos del ganado comunitario y generaba enfermedades a los semovientes.
8. Siembra de minas antipersonal y abandono de artefactos explosivos improvisados en Jambaló, Cauca. Los informes relacionan más de 200 artefactos improvisados, cientos de vainillas calibres 0.75 y 0.5, cables de detonación y cilindros explosivos.
9. El evenenamiento del afluente hídrico que abastece el acueducto ubicado en la Hacienda Miraflores de Miranda, Cauca, lo cual afectó directamente los recursos hídricos de la zona.
10. La militarización, siembra de minas antipersonal y la existencia de municiones sin explotar en el Cerro de Belén de Caldono, Cauca, el cual es un sitio sagrado para las comunidades.

[55] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 601 y ss.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

11. Un compareciente reconoció que la siembra de minas en la Laguna San Rafael, sitio sagrado de las comunidades, causó afectaciones al territorio y los pueblos.
12. Las FARC-EP cobraban impuestos a la minería ilegal y la siembra de cultivos ilícitos. Los comparecientes de las FARC-EP reconocieron que tuvieron control territorial sobre las zonas donde se recurría a esas economías ilegales y sin el cobro de impuestos no se hubiera podido realizar este tipo de actividades.[56]

El informe "*Conociendo para equilibrar la vida y sanar a Uma Kiwe (Madre Tierra), Territorio Ancestral Cxhab Wala Kiwe - Anexo del primer informe de afectaciones a la vida en el marco del conflicto armado "el pasado… la guerra, la esperanza, el buen vivir*" presentado ante esta Jurisdicción por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), específica aspectos relevantes en torno a la cosmovisión del Pueblo Nasa y el sufrimiento mental y cultural que genera la destrucción de la naturaleza:

> "Es importante señalar que desde la cosmovisión nasa, el origen del mundo comprende tres espacios de vida indisolubles. Ëe Kiwe (espacio de arriba), Naa Kiwe (espacio del medio), Kiwe Dxiju (espacio de abajo).
> En el espacio del medio habitamos los seres físicos y en los espacios de arriba y abajo se encuentran los espíritus mayores que ayudan a preservar el equilibrio y armonía, por lo tanto, toda desarmonía, afectación o daño que causen los seres físicos en contra de la naturaleza o entre ellos mismos, impactará de manera negativa en primera instancia al territorio, en segundo orden a las familias y finalmente a toda la comunidad, dada la interdependencia y relación de los espacios de vida en referencia".[57]

III. La destrucción de la madre naturaleza como un crimen de guerra

La Sala de Reconocimiento de la JEP, en los Casos 02 y 05 determinó que la destrucción del medio ambiente puede considerarse un crimen de guerra[58]. La Sala estableció que son

[56] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 616.
[57] ACIN –Informe "Conociendo para equilibrar la vida y sanar a Uma Kiwe (Madre Tierra), Territorio Ancestral Cxhab Wala Kiwe", pág. 10.
[58] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Auto No. 01 de 2023, Párr. 1006; y Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1259.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

dos los crímenes de guerra del Estatuto de Roma de la CPI que son aplicables a los casos estudiados por la Sala.

En primer lugar, en los dos Autos de Determinación de Hechos del Caso 05, en los cuales se imputa la comisión de crímenes internacionales a los ex integrantes de las FARC-EP que tuvieron presencia en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, la Sala consideró que la destrucción de la naturaleza podría considerarse un acto criminal de conformidad con el Artículo 8(2)(e)(xii): Destruir o apoderarse de bienes de un adversario, a menos que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo.[59]

Por otra parte, en el Auto de Determinación de Hechos del Caso 02[60] y el segundo Auto de Determinación de Hechos del Caso 05[61], la Sala consideró que estas conductas también podrían considerarse crímenes de guerra de conformidad con el Artículo 8(2)(e)(iv): Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares.[62]

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha señalado que el medio ambiente debe considerarse un bien de carácter civil y como tal no puede ser atacado a menos que se torne en un objetivo militar legítimo.[63] A partir de la *Convención sobre la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares u otros Fines Hostiles* de 1976, el DIH se ha referido de manera concreta a la protección del medio ambiente. El Protocolo Adicional Primero a los Convenios de Ginebra también hizo mención expresa a la protección del medio ambiente y de allí se deriva la redacción de las normas criminales

[59] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Auto No. 01 del 1 de febrero de 2023, párrs. 1005 y ss; y Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1284 y ss.
[60] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Auto No. 03 del 5 de julio de 2023, párrs. 1651 y ss.
[61] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1343 y ss.
[62] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1349.2. 2.
[63] CICR, Directrices sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado, 1994.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

relativas a los medios y métodos de guerra que afectan la naturaleza[64]. El artículo 35(3) del mencionado protocolo señala:

> "Artículo 35 – Normas fundamentales
> Queda prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural."[65]

Por su parte, el artículo 55 del Protocolo Adicional I generaba la obligación de velar por la protección del medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves, prohibiendo el uso de medios y métodos que tengan como consecuencia tales daños, debido a los efectos que estos representan para la salud y la supervivencia de la población[66]. El artículo también prohibía las represalias encaminadas a afectar el medio ambiente natural.[67]

Como señala Demeyere[68], desde el año 2010 la comunidad académica y profesional alrededor del DIH se enfocó con mayor fuerza en la protección del medio ambiente, y el 2020 marcó un punto de inflexión para la protección de la naturaleza por dos importantes situaciones. En primer lugar, la Comisión de Derecho Internacional de la ONU adoptó sus Principios sobre la Protección del Medio Ambiente en Relación con Los Conflictos

---

[64] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1296.

[65] Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), 8 de junio de 1977, Artículo 35(3).

[66] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1296.

[67] Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), 8 de junio de 1977, Artículo 55: "*Artículo 55 — Protección del medio ambiente natural*
1. En la realización de la guerra se velará por la protección del medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves. Esta protección incluye la prohibición de emplear métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar o de los que quepa prever que causen tales daños al medio ambiente natural, comprometiendo así la salud o la supervivencia de la población.
2. Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como represalias".

[68] Demeyere, Bruno, "Editorial. Protection of the Environment During Armed Conflict", *International Review of the Red Cross* (2023), 105 (924), 1167. Ver también Ramírez y Saavedra, "Derecho Internacional Humanitario y la protección del medio ambiente: nuevas perspectivas para Colombia" en Solano, Losada y Osorio (Eds.), *Desafíos del derecho internacional humanitario en Colombia: aspectos filosóficos, hermenéuticos, constitucionales y ambientales. Tomo II*, Universidad Externado de Colombia, 2022, págs. 496 y ss.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

Armados. Éstos fueron adoptados por resolución de la Asamblea General de la ONU del 7 de diciembre de 2022[69]. En segundo lugar, el Comité Internacional de la Cruz Roja actualizó en 2020 sus Directrices Sobre la Protección del Medio Ambiente Natural en Conflictos Armados.[70] Para Demeyere la necesidad actual de mayor importancia es operativizar el marco jurídico del DIH existente en favor de la protección del medio ambiente natural, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la regulación de este asunto, en los años 70s.[71]

A partir de los años 70s se expidieron numerosas normas internacionales y resoluciones que exigen la protección internacional del medio ambiente. Entre otras encontramos la Convención de Ottawa de 1997[72], la Resolución 47/37 del 1993 de la Asamblea General de las Naciones Unidas[73], la Resolución UNEP EA.2/RES.15 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente[74], las Resoluciones 1306 (2000), la 1457 (2003) y la 1856 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en las cuales ha resaltado la relación que existe entre la explotación de recursos naturales y la financiación de los conflictos armados, y el "Segundo Informe sobre la Protección del Medio Ambiente en Relación con los Conflictos Armados" de la Comisión de Derecho Internacional.[75] También debemos destacar la Declaración de Estocolmo de 1972, la cual recuerda que la naturaleza es esencial para el bienestar humano y para el goce de sus derechos.[76]

---

[69] Organización de Naciones Unidas (ONU), Asamblea General, Resolución 77/104: "*Protección del medio ambiente en relación con los conflictos Armados*", 7 de diciembre de 2022, Anexo.

[70] CICR, Directrices Sobre la Protección del Medio Ambiente Natural en Conflictos Armados: Normas y Recomendaciones Relativas a la Protección del Medio Ambiente Natural en Virtud del Derecho Internacional Humanitario, Con Comentario, Ginebra, 2020.

[71] Demeyere, Bruno, "Editorial. Protection of the Environment During Armed Conflict", *International Review of the Red Cross* (2023), 105 (924), 1168.

[72] Sobre las preocupaciones en materia ambiental que se tuvieron en cuenta para este tratado internacional ver Fleck, Dieter.: "Legal Protection of the Environment", Stahn, Carsten; Iverson, Jens y Easterday, Jennifer, *Environmental Protection and Transitions from Conflict to Peace*, Oxford: Oxford University Press, 2017.

[73] En esta resolución la Asamblea General afirmó: "*que ciertos medios y métodos bélicos pueden surtir efectos desastrosos sobre el medio ambiente*". Con la resolución se insta a los Estados a tomar las decisiones necesarias para la protección del medio ambiente en los conflictos armados

[74] Por medio de esta resolución se resaltó: "*la importancia decisiva de la protección del medio ambiente en todo momento, especialmente en tiempos de conflicto armado, y de su restauración después del conflicto, incluso de los efectos colaterales imprevistos de los desplazamientos humanos resultantes del conflicto armado*".

[75] Comisión de Derecho Internacional, Segundo Informe sobre la Protección del Medio Ambiente en Relación con los Conflictos Armados, págs. 11 y ss.

[76] ONU, Declaración de Estocolmo, 1972. Veáse: https://www.un.org/es/conferences/environment/stockholm1972.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha identificado una serie de normas del derecho internacional consuetudinario relacionadas con la protección del medio ambiente.[77] De conformidad con estas normas, la protección del medio ambiente restringe la forma en que los actores armados llevan a cabo las hostilidades[78]. La Norma 43 del DIH consuetudinario, aplicable en los conflictos armados no internacionales, establece:

> "Norma 43. Los principios generales sobre la conducción de las hostilidades se aplican al medio ambiente natural:
> A. Ninguna parte del medio ambiente natural puede ser atacada, a menos que sea un objetivo militar.
> B. Queda prohibida la destrucción de cualquier parte del medio ambiente natural, salvo que lo exija una necesidad militar imperiosa.
> C. Queda prohibido lanzar ataques contra objetivos militares de los que quepa prever que causen daños incidentales al medio ambiente natural que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista".[79]

Las normas 44 y 45 de la costumbre internacional humanitaria también son de particular relevancia en el escenario de la conducción de hostilidades[80]. Su aplicabilidad, aunque cuestionada para los conflictos armados no internacionales, se ve confirmada en Colombia por la implementación de normas penales relacionadas con la destrucción del medio ambiente natural[81]. Dichas normas, como veremos, son más amplias que las tipificadas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las normas citadas señalan:

---

[77] Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Base de datos sobre el DIH consuetudinario, Normas 43, 44 y 45. Disponibles en: https://ihl-databases.icrc.org/es/customary-ihl/v1.

[78] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1260.

[79] CICR, Base de datos sobre el DIH consuetudinario, Norma 43. Disponible en: https://ihl-databases.icrc.org/es/customary-ihl/v1/rule43

[80] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1270.

[81] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1270.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

> "Norma 44. Los métodos y medios de hacer la guerra deben emplearse teniendo debidamente en cuenta la necesidad de proteger y preservar el medio ambiente natural. En la conducción de las operaciones militares, han de tomarse todas las precauciones que sean factibles para no causar daños incidentales al medio ambiente o reducirlos, al menos, todo lo posible. La falta de certeza científica acerca de los efectos de ciertas operaciones militares sobre el medio ambiente no exime a las partes en conflicto de tomar tales precauciones.
>
> Norma 45. Queda prohibido el empleo de métodos o medios de guerra concebidos para causar, o de los cuales quepa prever que causen, daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural. La destrucción del medio ambiente natural no puede usarse como arma".[82]

Las normas de la costumbre aclaran que los principios del DIH de distinción, necesidad y proporcionalidad son aplicables durante las operaciones militares que puedan impactar el medio ambiente y sus derechos[83]. Esto fue confirmado por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva sobre la legalidad de la amenaza o uso de las armas nucleares, ponderando entre necesidad militar y la protección del medio ambiente.[84] La aplicación de estos principios no prohíbe de plano las operaciones militares, sino solamente aquellas en las que el medio ambiente no pueda considerarse como un objetivo militar[85]. Habrá situaciones en la que una necesidad militar imperiosa autorice las afectaciones al medio ambiente, por ejemplo, cuando una de las partes en conflicto utilice la naturaleza para resguardarse, ocultarse o camuflarse[86].

---

[82] CICR, Base de datos sobre el DIH consuetudinario, Normas 44 y 45.

[83] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1261.

[84] Corte Internacional de Justicia, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Opinión consultiva, I.C.J. reports 1996, 8 de julio de 1996, párr. 30: "El respeto al medio ambiente es uno de los elementos que deben tenerse en cuenta al determinar si una acción es conforme con los principios de necesidad y proporcionalidad"

[85] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1262.

[86] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1262.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

Desde la perspectiva del DIH, el medio ambiente puede considerarse un bien de carácter civil y, como veremos más adelante, un bien del adversario. En 1994 el CICR publicó las Directrices para la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado, como respuesta a una solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como ya se indicó, este documento fue actualizado en el año 2020 y su traducción al español se hizo en el año 2022. Este documento también proporciona luces sobre este asunto:

> "8. La destrucción del medio ambiente no justificada por necesidades militares constituye una violación del derecho internacional humanitario. En determinadas circunstancias, esa destrucción es punible como una violación grave del derecho internacional humanitario.
> 9. La prohibición general de destruir bienes de carácter civil, a menos que dicha destrucción esté justificada por necesidades militares, protege también al medio ambiente".[87]

La consideración del medio ambiente como un bien da luces sobre su protección desde el DIH, teniendo en cuenta los límites dispuestos por el principio de necesidad militar.[88] Una destrucción de bienes que no esté justificada por este principio, de conformidad con el Cuarto Convenio de Ginebra, podría considerarse una infracción grave al DIH y por lo tanto un crimen de guerra en conflictos armados internacionales[89]. A esto se suma la regla 50 de la costumbre del DIH, la cual de conformidad por lo señalado por el CICR sería aplicable en los conflictos internos[90]. La regla 50 de la costumbre del DIH establece que "*[q]ueda prohibido destruir o confiscar los bienes de un adversario, a no ser que lo exija una necesidad militar imperiosa*".[91]

---

[87] CICR, Directrices sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado, UN Doc. A/49/323, 19 de Agosto de 1994, Anexo, págs. 49-53.

[88] Ver, por ejemplo, el Artículo 147 del Convenio de Ginebra relativo a la protección de las personas civiles en los conflictos armados que señala que "*la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario*" podrá considerarse una infracción grave al DIH y, por lo tanto, un crimen de guerra.

[89] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1265.

[90] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1266.

[91] CICR, Base de datos sobre el DIH consuetudinario, Norma 50.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

El principio de proporcionalidad también restringe la forma en que se llevan a cabo operaciones militares que pueden ocasionar daños a la naturaleza[92]. Al analizar el principio de proporcionalidad con respecto a los daños ambientales, el Fiscal del Tribunal para la Antigua Yugoslavia afirmó que "*para satisfacer el criterio de proporcionalidad, los ataques contra objetivos militares que se sabe, o de los que cabe suponer razonablemente, que causarán graves daños ambientales deben ofrecer una ventaja militar potencial muy significativa para que se consideren legítimos*".[93] La norma 43 del DIH consuetudinario confirmaría que la destrucción al medio ambiente que sea excesiva con respecto a la ventaja militar directa y concreta[94] que se pretende alcanzar, es desproporcionada y violatoria del DIH.[95]

Otra faceta de la naturaleza se puede ver desde la perspectiva cultural. En este ámbito el DIH también tiene diversas normas que son de especial importancia y que fueron tenidas en cuenta por parte de la SRVR en el primer Auto de Determinación de Hechos del Caso 02. Es importante mencionar lo establecido en el Artículo 53 del Procotolo Adicional I a los cuatro Convenios de Ginebra, el cual establece que está prohibido "*cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos*".[96] Por su parte, el numeral 4º del Artículo 85 del mismo protocolo eleva estos ataques al nivel de gravedad de las infracciones graves al DIH y, en últimas, dándoles el rango de crímenes de guerra aplicables en conflictos armados internacionales. El artículo 16 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra tiene una disposición análoga, lo que sirve de fundamento para su inclusión en los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales que han criminalizado la conducta.

---

[92] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1269.

[93] ICTY, Final report to the prosecutor by the committee established tor review the NATO bombing campaign against the Federal Republic of Yugoslavia. Disponible en: https://www.icty.org/en/press/final-report-prosecutor-committee-established-review-nato-bombing-campaign-against-federal.

[94] Usualmente definida como aquella que proporciona un "*interés sustancial y relativamente próximo, descartando las ventajas que no sean perceptibles o que sólo se manifiesten a largo plazo*". Ver SANDOZ, Y/ SWINARSKI, C./ ZIMMERMAN, B.: Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (Protocolo I), Bogotá: CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, párr. 2209. Citado en CICR, Base de datos sobre el DIH consuetudinario, Norma 14.

[95] CICR, Base de datos sobre el DIH consuetudinario, Norma 43.

[96] Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), 8 de junio de 1977, Artículo 53.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

El CICR también ha identificado normas de la costumbre internacional humanitaria que son aplicables en el contexto de un conflicto interno a los bienes culturales. Las normas 38, 39 y 40 del derecho consuetudinario establecen que:

> "Norma 38. las partes en conflicto deben respetar los bienes culturales:
> A. En las operaciones militares se pondrá especial cuidado en no dañar los edificios dedicados a fines religiosos o caritativos, a la enseñanza, las artes o las ciencias, así como los monumentos históricos, a no ser que se trate de objetivos militares.
> B. No serán atacados los bienes que tengan gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, salvo en caso de necesidad militar imperiosa
>
> Norma 39. Queda prohibido utilizar bienes que tengan gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos para fines que pudieran exponerlos a su destrucción o deterioro, salvo en caso de necesidad militar imperiosa".
>
> Norma 40. Las partes en conflicto deben proteger los bienes culturales:
> A. Queda prohibido confiscar, destruir o dañar intencionadamente los establecimientos dedicados a fines religiosos o caritativos, a la enseñanza, las artes o las ciencias, así como los monumentos históricos y las obras artísticas o científicas.
> B. Queda prohibida cualquier forma de robo, pillaje o apropiación indebida de bienes que tengan gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, así como todo acto de vandalismo contra ellos".[97]

Como se puede observar, desde la perspectiva del DIH la naturaleza puede ser considerada un bien, y sobre todo un bien civil[98], y también parte el patrimonio cultural de los pueblos[99]. Esta solamente puede ser atacada en circunstancias excepcionales, una

[97] CICR, Base de datos sobre el DIH consuetudinario, Normas 38, 39 y 40.
[98] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Auto No. 01 de 2023, Párr. 1025.
[99] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1343 a 1347; 1349.2.1 y 135.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

ventaja militar imperativa[100]. A continuación, nos referiremos al Derecho Penal Internacional aplicable a los conflictos armados internos y el tratamiento que desde esta rama del derecho se puede dar al problema.

Las condiciones para que una violación del DIH sean de tal gravedad para que se consideren crímenes de guerra fueron dadas en la decisión de jurisdicción del año 1995 en el caso del Fiscal contra Dusko Tadić del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Esta decisión ha sido calificada por Scharf como un momento Grociano en el derecho internacional aplicable a los crímenes de guerra, haciendo referencia a Hugo Grocio.[101] Las condiciones, de carácter acumulativo, son las siguientes:

> "(i) la violación debe constituir una infracción de una regla de derecho internacional humanitario; (ii) la regla debe existir en el derecho consuetudinario o, si pertenece al derecho de los tratados, deben cumplirse las condiciones requeridas;
> (iii) la violación debe ser "grave"; es decir, debe constituir una infracción de una regla que proteja valores importantes, y la infracción debe involucrar consecuencias graves para la víctima; y,
> (iv) la violación debe implicar, conforme al derecho consuetudinario o convencional, responsabilidad penal individual de la persona que quebranta la regla".[102]

El Estatuto de Roma tipifica ciertas conductas que violan el artículo 3 común de los cuatro Convenios de Ginebra[103], así como otras violaciones a las leyes y usos aplicables en los conflictos internos.[104] Por otra parte, el artículo 8(2)(b)(iv) del Estatuto criminaliza el lanzar un ataque intencionalmente a sabiendas de que causará daños al medio ambiente natural cuando estos daños sean manifiestamente excesivos con relación a la ventaja militar concreta:

---

[100] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr 1284.7.
[101] Scharf, Michael, "How the Tadic Appeals Chamber Decision Fundamentally Altered Customary International Law", en Sterio y Scharf (Eds.), *The legacy of ad hoc tribunals in international criminal law*, Cambridge University Press, 2019, págs. 59 y ss.
[102] TPIY, El Fiscal v. Dusko Tadic, Decision on Interlocutory Appeal on Jurisdiction, ICTY- 94- 1- AR72, 2 de octubre de 1995, párr. 94.
[103] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Artículo 8(2)(c).
[104] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Artículo 8(2)(e).

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

> "iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea".[105]

Este crimen, aunque no encuentra una disposición análoga en los literales correspondientes a los crímenes de guerra en los conflictos internos, ha sido tipificado en el código penal colombiano, con algunas diferencias[106]. Al respecto debemos mencionar lo señalado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, en su base de datos sobre el DIH consuetudinario, afirmando que la práctica internacional sobre los crímenes de guerra "*no excluye la posibilidad de que un Estado pueda definir, en su ordenamiento jurídico interno, otras violaciones del derecho internacional humanitario como crímenes de guerra*".[107]

Como ya se ha mencionado, el medio ambiente en el derecho de los conflictos armados, además de gozar de una protección autónoma, tiene una regulación jurídica a través del derecho de los bienes[108]. Por lo anterior, en cuanto a los conflictos internos, la protección del medio ambiente también puede darse a través de los crímenes relacionados con la protección de bienes[109], lo cual no excluye la importancia de su protección autónoma, sino que resalta el carácter pluriofensivo de este tipo de conductas[110].

Teniendo en cuenta lo anterior, el primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 05 resolvió que los delitos cometidos contra la naturaleza podrían tipificarse de conformidad con el artículo 8(2)(e)(xii) del Estatuto de Roma, que establece que será crimen de guerra "*Destruir o apoderarse de bienes de un adversario, a menos que las necesidades*

---

[105] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Artículo 8(2)(b)(iv).
[106] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr.1283 y 1284.3
[107] CICR, Base de datos sobre DIH, Derecho Consuetudinario, Norma 156.
[108] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr.1284.1.
[109] Gillett, Matthew y Lostal, Marina, *Informe sobre imputación de daños medioambientales ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)*, 2023. Ver también Gillett, Matthew, Prosecuting Environmental Harm before the International Criminal Court, Cambridge University Press, 2021, págs. 120-121.
[110] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr.1284.4.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

del conflicto lo hagan imperativo".[111] El documento de Elementos de los Crímenes de la Corte Penal Internacional establece como elementos de este crimen los siguientes:

> "Artículo 8 2) e) xii) Crimen de guerra de destruir bienes del enemigo o apoderarse de bienes del enemigo
> Elementos
> 1. Que el autor haya destruido un bien o se haya apoderado de un bien.
> 2. Que ese bien haya sido de propiedad de una parte enemiga.
> 3. Que ese bien haya estado protegido de la destrucción o apropiación en virtud del derecho internacional de los conflictos armados.
> 4. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias que establecían la condición del bien.
> 5. Que la destrucción o apropiación no haya estado justificada por necesidades militares.
> 6. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no era de índole internacional y haya estado relacionada con él.
> 7. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que establecían la existencia de un conflicto armado".[112]

Como se puede observar, mientras que la traducción al español del Estatuto de Roma define a las víctimas del crimen como "adversarios"[113], la traducción del mismo artículo en los Elementos de los Crímenes usa la palabra "enemigos", más propia de los conflictos armados internacionales. En este caso, se debe preferir el vocablo utilizado en el Estatuto de Roma, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 21, relativo a las fuentes aplicables por la Corte Penal Internacional.[114]

La CPI ha interpretado este crimen y ha afirmado que para que este se cometa la propiedad destruida, por acción u omisión, debe "*pertenecer a individuos o entidades*

---

[111] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Artículo 8(2)(e)(xii).
[112] Elementos de los crímenes, Artículo 8(2)(e)(xii).
[113] Ver, Boddens Hosang, Hans, "13. Article 8(2)(b)(xiii)-Destroying or Seizing the Enemy's Property" en Lee, Roy S.,*The International Criminal Court. Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, Transnational Publishers, 2001, pág. 170-172.
[114] "Artículo 21 Derecho aplicable
1. La Corte aplicará:
a) En primer lugar, el presente Estatuto, los Elementos de los crímenes y sus Reglas de Procedimiento y Prueba…"

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

alineados con o pertenecientes a una parte adversa del conflicto o que sean hostiles al autor".[115] La propiedad en cuestión puede ser pública o privada y mueble o inmueble, lo cual es predicable de ciertos recursos naturales que hacen parte del medio ambiente.[116] Este delito no solo aplica cuando el ataque se dirige específicamente en contra de un objetivo militar, sino que también se aplica cuando se dirige hacia la propiedad de carácter civil, tal como sucede con la naturaleza.[117] La sentencia de primera instancia en el caso del Fiscal contra Germain Katanga en la CPI ha aclarado que lo verdaderamente esencial de este crimen es que la propiedad, pública o privada, pertenezca a una persona o personas adversas al grupo armado.[118] Este carácter de "adversario" puede partir de la propia categorización que el grupo armado, que destruye o se apropia del bien, haga de las personas atacadas, sin que sea necesario que estas objetivamente pertenezcan a una de las partes en conflicto[119]. Lo anterior resulta más claro si se tiene en cuenta que el artículo 8(2)(e)(xii) incluye la propiedad civil como aquella que puede ser atacada, pues no diferencia entre "combatientes adversarios" y "adversarios civiles", como sí lo hace el artículo 8(2)(e)(ix) del ER.[120]

El significado que debe darse a la palabra adversario se comprende de mejor manera cuando se considera también el Artículo 49 del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra, el cual define la noción de ataque en el DIH como los "*actos de violencia* [cometidos en] *contra del adversario, sean ofensivos o defensivos*".[121] Teniendo en cuenta que las personas y bienes protegidos por el DIH son principalmente los civiles, sería contraintuitivo afirmar que se criminalizan los ataques contra adversarios que combaten, pues esto haría inaplicable la mayoría de las disposiciones.[122]

---

[115] CPI, The Prosecutor v. Katanga, Decisión de Confirmación de Cargos, ICC-01/04-01/07, 30 de septiembre de 2008, párr. 310.
[116] Gillett, Matthew y Lostal, Marina, *Informe sobre imputación de daños medioambientales ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)*, 2023, pág. 33.
[117] CPI, The Prosecutor v. Katanga, Decisión de Confirmación de Cargos, ICC-01/04-01/07, 30 de septiembre de 2008, párr. 311.
[118] CPI, The Prosecutor v. Katanga, Sentencia de Primera Instancia, ICC-01/04-01/07, 7 de marzo de 2014, párr. 892.
[119] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1284.5.
[120] Estatuto de Roma de la CPI, Artículo 8(2)(e)(ix): "Matar o herir a traición a un combatiente adversario".
[121] Protocolo Adicional I de 1977, Artículo 49.1.
[122] Coco, Antonio, Guerrilla Attacks on Towns (Tomas Guerrilleras) in International Criminal Law, 2023, págs. 6-7.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

La calificación de los daños a la naturaleza con base en el Artículo 8(2)(e)(xii) fue acogida recientemente en el más reciente "*International Review*" del CICR, dedicado especialmente al tema de la protección del medio ambiente.[123] Gillett señala que "[l]*a disposición con mayor potencial de aplicación es el artículo 8.2.e.xii), que prohíbe destruir o confiscar los bienes de un adversario*". En diversos apartados de la revista se hacen menciones a los desarrollos de los Casos 02 y 05 de la SRVR.[124]

Ahora nos referiremos a la segunda alternativa planteada por la SRVR para calificar los daños a la madre tierra desde el derecho penal internacional. Teniendo en cuenta la relación que existe entre los pueblos indígenas, afrocolombianos y las comunidades campesinas con su territorio, en el Caso 02 la SRVR consideró que la destrucción del territorio puede calificarse de conformidad con el Artículo 8(2)(e)(iv) del Estatuto de Roma. Este artículo señala que será un crimen de guerra el "[d]*irigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares*".

La imputación parte de una idea fundamental para comprender adecuadamente los efectos de la violencia sobre los pueblos étnicos:

> "1765. Los Pueblos y comunidades no dividen la vida en dos categorías ontológicamente distintas: la naturaleza, por un lado, y la cultura, por otro. Ni conciben la vida según las oposiciones binarias que se desprenden de esta separación, como es lo bio y lo geo, sujeto y objeto, sintiente e inerte, espiritual y secular. De modo heterogéneo para muchas de las comunidades

[123] Gillett, Matthew, "Criminalizing reprisals against the natural environment", en *International Review of the Red Cross*, Volumen 105, Número 924, (2023), pág. 1490. (Traducción propia).

[124] Ver también Sjöstedt y Hulme, "Re-evaluating international humanitarian law in a triple planetary crisis: New challenges, new tools": en *International Review of the Red Cross*, Volumen 105, Número 924, (2023), pág. 1260: "*En una serie de resoluciones históricas, la JEP ha declarado que varios territorios indígenas se consideran "víctimas" del conflicto armado. El territorio no debe considerarse simplemente en el sentido de las nociones occidentales de propiedad o derecho de la tierra, sino como algo que engloba el medio ambiente, los seres humanos y no humanos, incluido lo espiritual, y su interacción. El reconocimiento de estos territorios específicos como víctimas significa que tendrán derechos legales, incluido el acceso a la justicia, la verdad y las reparaciones.*" (Traducción propia).

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

> que forman parte de la diversidad de mundos rurales del país, estas separaciones no existen de tal manera".[125]

Los elementos del crimen de destrucción de bienes culturales están detallados en el documento de elementos de los crímenes de la siguiente manera: "1. Que el autor haya lanzado un ataque. 2. Que el ataque haya estado dirigido contra uno o más edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales o los lugares en que se agrupe a enfermos y heridos que no sean objetivos militares. 3. Que el autor haya tenido la intención de dirigir el ataque contra tales edificios dedicados a la religión, educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, monumentos históricos, hospitales o lugares en que se agrupa a enfermos y heridos que no sean objetivos militares".[126]

Como recuerda el Auto de Determinación de Hechos del Caso 02, el DIH protege la propiedad cultural desde las Convenciones de La Haya de 1907 y el informe entregado por la Comisión de Responsabilidades de la Primera Guerra Mundial de 1919, los cuales afirmaron que la destrucción indiscriminada de bienes culturales era un crimen de guerra.[127] Como ya se mencionó en el apartado relativo al DIH, el Protocolo Adicional II, en su artículo 16 prohíbe los ataques a la propiedad cultural. La decisión de primera instancia en el caso del Fiscal contra *Al Mahdi* consideró que un ataque, en los términos del Artículo 8(2)(e)(iv) del Estatuto de Roma, podría considerarse un acto hostil cometido contra bienes protegidos cometidos durante o después de la conducción de hostilidades.[128]

La Sala de Reconocimiento recordó que la definición de bienes culturales se encuentra en el artículo 1 de la Convención de La Haya de 1954[129]:

---

[125] Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y las Conductas, Auto No. 03 del 5 de julio 2023, Determinar los hechos y conductas ocurridas en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas cometidos por quienes fueron integrantes de la extinta guerrilla de las FARC-EP, párr. 1765, pág. 582.

[126] Elementos de los Crímenes de la Corte Penal Internacional, Artículo 8(2)(e)(iv).

[127] Corte Penal Internacional, *el Fiscal v. Al-Madhi*, ICC-01/12-01/15, Sentencia de Primera Instancia, 27 de septiembre de 2016, párr. 14.

[128] Corte Penal Internacional, *el Fiscal v. Al-Madhi*, ICC-01/12-01/15. Sentencia de Primera Instancia, 27 de septiembre de 2016, párr. 15.

[129] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1349.1.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

> (a) Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos;
> (b) Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales muebles definidos en el apartado (a), tales como los museos, las grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los refugios destinados a proteger en caso de conflicto armado los bienes culturales muebles definidos en el apartado (a);
> (c) Los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales definidos en los apartados (a) y (b), que se denominarán "centros monumentales".[130]

La interpretación que ha hecho el CICR del artículo 16 del Protocolo Adicional segundo a los Convenios de Ginebra define los lugares culturales como aquellos que "*independientemente de su valor cultural, tienen un valor espiritual y expresan la conciencia de un pueblo*".[131] Para la relatora especial de la a Subcomisión sobre la Prevención de la Discriminación y la Protección de Minorías y Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, por patrimonio de un pueblo debemos entender "*todo lo que forma parte de la identidad característica de un pueblo, que puede compartir, si lo desea, con otros pueblos. Esta expresión abarca todo lo que en la legislación internacional se considera como creación del pensamiento y de la destreza del ser humano, como, por ejemplo, canciones, relatos, conocimientos científicos y obras de arte. Incluye también el patrimonio histórico y natural, como los restos humanos, las características naturales del paisaje y las especies vegetales y animales autóctonas con las que un pueblo ha estado tradicionalmente vinculado*".[132]

---

[130] Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, Artículo 1.
[131] CICR, Comentario al Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949, 1998, par. 4839. Citado por la SRVR en el párrafo 1776 del ADHC del Caso 02.
[132] Erica-Irene Daes, "Study on the protection of the cultural and intellectual property of indigenous peoples", 1993, E/CN.4/Sub.2/1993/28, par. 24. Citado por la SRVR en el párrafo 1777 del ADHC del Caso 02.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

El crimen de guerra de destrucción de propiedad cultural, como ya se mencionó, tiene un origen en la Convención de La Haya de 1954[133]. El artículo 15 del segundo Protocolo adicional a dicha convención, el cual es aplicable en los conflictos armados internos, establece que será una violación grave:

> "1. Cometerá una infracción en el sentido de este Protocolo toda persona que, deliberadamente y en violación de la Convención o del presente Protocolo, realice uno de los siguientes actos:
> a) hacer objeto de un ataque a un bien cultural bajo protección reforzada;
> b) utilizar los bienes culturales bajo protección reforzada o sus alrededores inmediatos en apoyo de acciones militares;
> c) causar destrucciones importantes en los bienes culturales protegidos por la Convención y el presente Protocolo o apropiárselos a gran escala;
> d) hacer objeto de un ataque a un bien cultural protegido por la Convención y el presente Protocolo;
> e) robar, saquear o hacer un uso indebido de los bienes culturales protegidos por la Convención, y perpetrar actos de vandalismo contra ellos.
> 2. Cada Parte adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos, con arreglo a su legislación nacional, las infracciones indicadas en el presente Artículo, y para sancionar esas infracciones con penas adecuadas. Al hacer esto, las Partes se conformarán a los principios generales del derecho y del derecho internacional, comprendidas las normas que hacen extensible la responsabilidad penal individual a personas que no han sido autoras directas de los actos".[134]

El numeral segundo del artículo 15 es de particular relevancia, teniendo en cuenta la tipificación de estas conductas en el código penal colombiano, en los Artículos 154 y 156.

IV. Relación entre la desaparición forzada y la destrucción del medio ambiente

[133] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, párr. 1349.2.4.
[134] Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, 1999, Artículo 15.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

Las víctimas acreditadas en la Jurisdicción Especial para la Paz han sido claras al señalar que existe una relación entre la desaparición forzada y la destrucción del medio ambiente. En el segundo Auto de Determinación de Hechos del Caso 05 de la Sala de Reconocimiento, especialmente en su capítulo E 2.9, se establece que la desaparición de personas mediante su enterramiento en zonas de reserva que constituyen lugares sagrados puede constituir un crimen contra el medio ambiente como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad.[135]

La Sala de Reconocimiento ya ha establecido que hay prueba sumaria de este vínculo, por lo que a través del Auto No. 226 del 2023 resolvió acreditar al río Cauca de Colombia como un sujeto de derechos y una víctima del conflicto armado colombiano.

En el Auto No. 001 del 28 de marzo de 2025 las Subsalas D y H de la Sala de Reconocimiento de la JEP recordaron que uno de los principales hechos victimizantes por los cuales fue acreditado el rio Cauca en el Caso 05[136] fue el lanzamiento de cientos de cadáveres a su cauce, convirtiéndolo en una fosa común, afectando el agua y las especies que lo habitan y destruyendo profundamente la relación de decenas de comunidades con la naturaleza.[137] Las Sala de Reconocimiento señaló que dentro del Caso 5 se han recaudado múltiples pruebas que demuestran que durante los años 2000 a 2004 se realizó una conducta sistemática por parte de grupos paramilitares y permitida por la Fuerza Pública de asesinar personas y arrojarlas al río Cauca para que nunca pudieran ser encontradas.

En palabras de las víctimas acreditadas en la JEP, los actores armados "*utilizaron al río Cauca a la altura de Buenos Aires para la perpetración y ocultación de sus crímenes, convirtiéndolo en una gran fosa común*".[138] El río Cauca no solamente fue degradado e instrumentalizado al desaparecer seres humanos usando sus aguas, sino que además fue afectado por otras dinámicas de violencia como la minería ilegal y la distribución de estupefacientes a través del río. Las comunidades de los municipios de Buenos Aires y Suárez, en el departamento

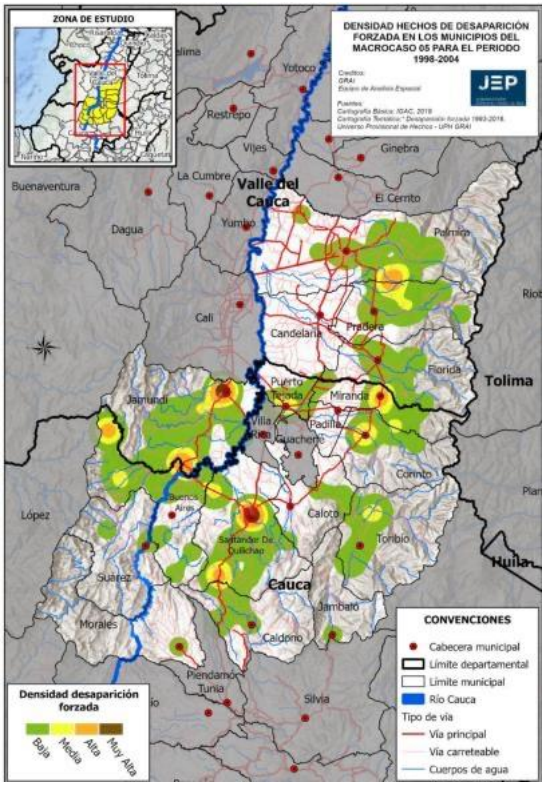
[135] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala G, Auto No. 002 de 2024, pág. 361 y ss.
[136] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Auto No. 226 del 2023 en el Caso 05.
[137] Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsalas D y H, Auto No. 001 de 2025, párr. 88 y ss.
[138] Informe Responsabilidad penal internacional de la Fuerza Pública en el municipio de Buenos Aires, pág. 215.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

del Cauca, así como la comunidad de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, resultaron afectadas.

En el curso de la investigación el Grupo de Análisis de Información de la JEP entregó el "*Documento de análisis espacial basado en la práctica de cartografía participativa sobre el fenómeno de desaparición forzada en los municipios del macro Caso 05 que prioriza la situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, para los años 1993-2016*". El informe señala que el periodo con mayor número de desapariciones forzadas en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca fue el de 1998-2004 y que corresponde con la entrada del paramilitarismo y la consolidación del Bloque Calima de las AUC en la región especialmente en las cabeceras de Jamundí y Santander de Quilichao, así mismo gran densidad en Alto Naya, Timba, La Balsa, La Buitrera, la vía Mondomo-El Llanito y Miranda. En este periodo se presentaron 256 casos de desapariciones forzadas cuyas áreas de ocurrencia se presentan en los siguientes mapas:

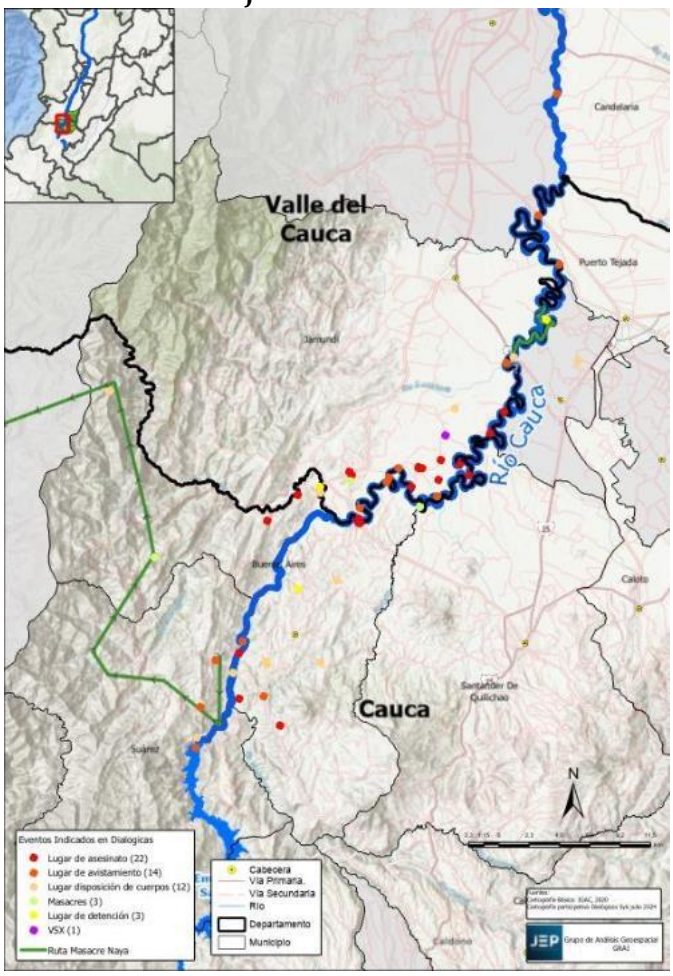
Mapa 1. Hechos UPH de desaparición forzada, 1998-2004



Fuente Universo Provisional de Hechos (UPH). Elaboró GRAI

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

Mapa 3. Clasificación de hechos indicados en las diligencias dialógicas de 5 y 6 de julio de 2024



Elaboró GRAI

El informe también relaciona algunos lugares en los cuales se concentraron las conductas de arrojar cuerpos al río Cauca. Estos fueron:

(i) **El puente vehicular de La Balsa**: Este puente atraviesa el río Cauca y conecta los municipios de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, y Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Allí la comunidad solía ver cuerpos de personas asesinadas, incluso mutiladas y manchas de sangre sobre el río;

(ii) **Boca del río Timba, donde el río Timba desemboca en el río Cauca**: El informe señala que Timba y en general esta región, fue testigo de innumerables

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

atrocidades, descritas en prácticas espeluznantes como torturas y asesinatos y abandono deliberado de los cuerpos en el río. Algunos cadáveres eran arrojados para que flotaran corriente abajo, en un macabro mensaje de intimidación hacia la población, mientras que otros eran embalsamados con piedras, ocultándolos por completo.

(iii) **El Boom o Bum**: El informe del GRAI señala que en este lugar, la presencia de cuerpos completos o partes desmembradas flotando en el río era una escena tristemente recurrente. Los testimonios recogidos durante este ejercicio, especialmente los de los lancheros que recorrían estas aguas, revelan actos de valentía en medio del miedo impuesto por los grupos ilegales. Estos hombres con medios rudimentarios, y cuando las circunstancias lo permitían, rescataban los cuerpos de personas conocidas, amigos o miembros de su comunidad. Utilizaban bejucos para amarrar los cuerpos y mantenerlos a flote cerca de las orillas, esperando que sus familias pudieran llegar a reconocerlos y darles un entierro digno. Muchos otros simplemente eran dejados a la deriva, arrastrados por las corrientes como anónimos testigos de la brutalidad.

(iv) **La Curva del Muerto**: El informe del GRAI señala que la población civil cambió el nombre de este lugar, conocido previamente como Las Estrellas, debido a la desaparición forzada de personas. Las corrientes arrastraban restos de cuerpos humanos, despojos humanos arrojados y arrastrados por el río, víctimas de torturas y asesinatos que suplicaban compasión por sus vidas, así como vehículos baleados con personas dentro, que fueron abandonados a la deriva de las aguas del río. Los habitantes de la región aterrados por el riesgo inminente abandonaron sus hogares y tierras.

(v) **Charco El Perro**: El informe del GRAI señala que los testigos entrevistados les indicaron grupos armados llevaban a personas hasta las orillas del río, donde las sometían a brutales torturas y asesinatos y luego los cuerpos eran arrojados al río. Las personas eran asesinadas o incluso mutiladas y lanzadas al río.

(vi) **La Isla**: El informe del GRAI señala que La Isla es una formación natural característica del río, cuya apariencia cambia con las estaciones. Durante el invierno, las aguas crecientes la cubren por completo, mientras que en verano emerge como un terreno firme y fértil, apto incluso para actividades agrícolas y de cultivo. Las dinámicas propias del río permitían que los cuerpos de las víctimas quedaran encallados entre ramas y sedimentos.

V. Conclusión

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

La Sala de Reconocimiento ha imputado a excombatientes de las FARC-EP la destrucción del medio ambiente, afirmando que esta destrucción puede ser un crimen de lesa humanidad de otros actos inhumanos. La Sala también ha considerado que la destrucción de la naturaleza constituye los crímenes de guerra tipificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en los numerales (iv) y (xii) del Artículo 8(2)(e). La Sala de Reconocimiento también ha encontrado que existe un vínculo entre la desaparición forzada y la destrucción del medio ambiente, especialmente en aquellos casos en los que se utilizan los ríos como medio para desaparecer forzosamente personas en el marco del conflicto armado colombiano.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

Crimes committed against the environment in northern Cauca and southern Valle del Cauca. Legal qualification of the destruction of Mother Nature in Case 05 of the JEP.

Raul Eduardo Sánchez Sánchez
Magistrate of the Tribunal for Peace
Colombian Special Jurisdiction for Peace

Carlos Guillermo Castro Cuenca
Assistant Magistrate

Carlos Fonseca Sánchez
Assistant Magistrate

I. Introduction

The purpose of this document is to show the contributions that have been made from Case 05 of the Chamber for the Recognition of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conducts of the Colombian Special Jurisdiction for Peace to the debate on whether the destruction of the environment can be classified as an international crime. With it we want to contribute to the construction of the Thematic Report on Enforced Disappearances in the context of the defense of land, environment and natural resources by the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances of the UN Human Rights Council.

First, we set out the reasons why we consider in the framework of Case 05 that the destruction of the environment can be considered a crime against humanity. Secondly, we refer to the possibility of considering these crimes as war crimes. Third, we point out the points of contact that exist between the conduct of forced disappearance and the destruction of the environment.

In the framework of Case 05, there have been two decisions of determination of facts and conducts (preliminary indictments), in which 21 persons were charged with the crime

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

against humanity of other inhumane acts and war crimes of destroying or seizing the property of an adversary and destruction of cultural property and places of worship for acts related to the destruction of Mother Nature.

By means of Decision No. 226 of July 11, 2023, the Recognition Chamber in Case 05 decided to recognize the Cauca River as a victim of the Colombian armed conflict, especially for the damage caused due to the instrumentalization of the river as a means for enforced disappearance. On March 28, 2025, Sub-Chambers H and N of the Recognition Chamber of the SJP issued Decision No. 001 of 2025, in which 5 former members of the Colombian Army were called to testify voluntarily for facts related to forced disappearance and the destruction of Mother Nature. The third section of this document summarizes the analysis of the Chamber in this last decision.

II. Destruction of Mother Nature as a crime against humanity of other inhumane acts

Paragraph G.1.3.5., paragraphs 1121 et seq. of the second Decision of Findings of Facts and Conducts in Case 05 of the Chamber of Recognition sets out the reasons why the Chamber considered that the destruction of nature constitutes the crime of other inhumane acts of a similar nature.[139]

The Chamber recalled that, in accordance with Article 7(1)(k) of the Rome Statute, crimes against humanity include "*other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health*".[140] Additionally, in accordance with the ICC Elements of Crimes document, in order to attribute this conduct it is necessary to verify the existence of the following elements: (i) that the perpetrator, by means of an inhumane act, caused great suffering or seriously endangered physical or mental health; (ii) that the act was similar in nature to any of the acts referred to in Article 7(1) of the Statute; (iii) that the perpetrator was aware of the factual circumstances that determined the character of the act; (iv) that the conduct was committed as part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population; and, (v) that the perpetrator was aware that the conduct was part of a widespread or systematic attack

[139] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, paras. 1121-1121.21.
[140] Ibid., para. 1008.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

directed against a civilian population or intended the conduct to be part of such an attack.[141]

The Trial Chamber accepted the statement of Pre-Trial Chamber I of the ICC in the Katanga case, when it affirmed that an interpretation of Article 7(1)(k) that is in accordance with the principle of nullum crimen sine lege of Article 22 ER implies that 'other inhumane acts' should be considered as serious violations of customary international law and of the basic rights of human beings derived from international human rights law.[142]

The Chamber considered that, in order to qualify the conduct that destroys mother earth as an inhumane act as a crime against humanity, it is necessary to take into account that the particular characteristics of the individual and/or collective victims (indigenous, Afro-descendants, peasants) may imply that, by virtue of their special relationship with nature, their destruction may have caused them immense pain or suffering.[143]

The Chamber of Acknowledgment recalled that the ICC in the Katanga case, accepting what was stated by the Appeals Chamber of the ICTY in the Vasiljević Case, indicated that, in order to establish whether an inhumane act is involved, the personal circumstances of the victims, such as their age, sex, health, as well as the physical, moral and mental effects that the act generates in the specific victims, can be taken into account.[144] In this sense, the Chamber of Recognition affirmed that the affectations to nature, especially in the territories of indigenous and Afro-Colombian peoples, not only have impacts on the territory and water sources, but also had an immediate effect on the spiritual life of the ethnic peoples, as well as on the mental health and cultural identity of its members. This inasmuch as the members of the ethnic peoples accredited as victims

---

[141] ICC, Elements of Crimes, article 7(1)(k). Available at: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/A851490E-6514-4E91-BD45-AD9A216CF47E/283786/ElementsOfCrimesSPAWeb.pdf

[142] ICTY, *Prosecutor v. Kupreškić et al*., Trial Judgment, IT-95-16-T, January 14, 2000, para. 566; ICTY, Prosecutor v. Stakić, Trial Judgment, IT-97-24-T, July 31, 2003, para. 721; ICC, *Prosecutor v. Germain Katanga*, Decision on the Confirmation of Charges, Pre-Trial Chamber I, ICC-01/04-01/07, September 30, 2008, para. 448.

[143] Idem, para. 1121.

[144] Idem, para. 1121.1; ICC, *The Prosecutor v. Katanga & Ngudjolo*, Decision Confirming Charges, ICC-01/04-01/07-717, 01 October 2008, para. 449. Citing ICTY, *The Prosecutor v Vasiljević*, Case No. 1T-98-32-A. Appeal Judgment, 25 February 2004, para. 165.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

in Case 05 of the Recognition Chamber have, as part of their culture, a spiritual relationship with the land and its well-being.

To illustrate the relationship that exists between indigenous and Afro-descendant peoples and their territory, the Recognition Chamber also considered relevant the *"Principles on the Protection of the Environment in Relation to Armed Conflict"*,[145] accepted by Resolution A/RES/77/104 of the United Nations General Assembly on December 7, 2022, which take into account the special impact that armed conflict has on nature in the lands or territories inhabited by Indigenous Peoples:

> "Principle 5, Protection of the environment of Indigenous Peoples.
> 1. States, international organizations and other relevant actors shall take appropriate measures, in the event of an armed conflict, to protect the environment of the lands and territories that Indigenous Peoples inhabit or traditionally use.
> 2. When an armed conflict has adversely affected the environment of the lands and territories that Indigenous Peoples inhabit or traditionally use, States shall undertake appropriate and effective consultations and cooperation with the Indigenous Peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their own representative institutions, for the purpose of taking remedial measures".[146]

Also relevant for the Chamber was the ILO Convention 169[147] on Indigenous and Tribal Peoples, which expressly mentions the rights of indigenous peoples with respect to their lands.[148] Article 7 states that the peoples have the right to decide on the development activities that take place in their territories and their beliefs and spiritual well-being must be taken into account in the elaboration of development plans. Likewise, Article 13 of the Convention recognizes "*In applying the provisions of this Part of the Convention governments shall respect the special importance for the cultures and spiritual values of the peoples concerned*

[145] Idem, para. 1121.2.
[146] United Nations, General Assembly, Resolution A/RES/77/104, December 7, 2022, Principle 5.
[147] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Recognition of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, paras. 1121.3.
[148] The rights of the peoples concerned to the natural resources pertaining to their lands shall be specially protected. These rights include the right of these peoples to participate in the utilization, management and conservation of these resources".

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

of their relationship with the lands or territories, or both as applicable, which they occupy or otherwise use, and in particular the collective aspects of this relationship."[149]

Subsequently, the Chamber referred to the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples[150] , which in several of its articles expressly recognizes the right of indigenous and tribal peoples to preserve their relationship with nature. In this sense, Article 29 of the Convention states that *"indigenous peoples have the right to the conservation and protection of the environment*"[151] , which includes the express right to maintain and strengthen their spiritual relationship with nature, as stated in Article 25:

> "Indigenous peoples have the right to maintain and strengthen their distinctive spiritual relationship with their traditionally owned or otherwise occupied and used lands, territories, waters and coastal seas and other resources and to uphold their responsibilities to future generations in this regard".[152]

The ILO Convention 169 also stresses the need to recognize the importance of the relationship between indigenous communities and their territories:

> "In applying the provisions of this Part of the Convention governments shall respect the special importance for the cultures and spiritual values of the peoples concerned of their relationship with the lands or territories, or both as applicable, which they occupy or otherwise use, and in particular the collective aspects of this relationship".[153]

This right of indigenous and tribal peoples with respect to nature, recognized by the Declaration, includes in turn an autonomous right to maintain and protect their religious and cultural sites and to access them privately:

---

[149] ILO, Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, 1989, Article 13 (1).
[150] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1121.4.
[151] UN, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Article 29 (1).
[152] UN, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Article 25.
[153] ILO, Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, 1989. Article 13, paragraph 1.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

> "Indigenous peoples have the right to manifest, practise, develop and teach their spiritual and religious traditions, customs and ceremonies; the right to maintain, protect, and have access in privacy to their religious and cultural sites; the right to the use and control of their ceremonial objects; and the right to the repatriation of their human remains".[154]

The impossibility of carrying out their religious ceremonies ends up affecting these rights, as well as the spiritual health of the people, which also includes the conservation of their medicinal plants, animals and minerals of vital interest:

> "Indigenous peoples have the right to their traditional medicines and to maintain their health practices, including the conservation of their vital medicinal plants, animals and minerals. Indigenous individuals also have the right to access, without any discrimination, to all social and health services."[155] .

This situation especially affects minors, for whom the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples includes not only their right to physical and mental development, but also their spiritual development:

> "States shall in consultation and cooperation with indigenous peoples take specific measures to protect indigenous children from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development, taking into account their special vulnerability and the importance of education for their empowerment. "[156] .

Regarding the Afro-descendant peoples, the Court took into account that the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) has expanded the protection of Afro-descendant communities[157] , assimilating their protection to that of indigenous and tribal

---

[154] UN, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Article 13, paragraph 1.
[155] UN, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Article 24, paragraph 1.
[156] UN, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Article 17, paragraph 2.
[157] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, paras. 1121.13.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

peoples and covering them with all the measures contemplated in ILO Convention 169[158], This was also recognized by the Constitutional Court of Colombia in Ruling C-295 of 2019, which establishes that the Afro-Colombian People is a tribal people covered by Convention 169 .[159]

On the other hand, the Chamber of Recognition referred to the Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, submitted to the IACHR Court, in which it was recognized that indigenous peoples have close ties to their territories and that these ties are fundamental to their culture, spiritual life, collective integrity and economic survival.[160] This position was reiterated by the IACHR Court in the Plan de Sánchez Massacre Case and in the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay Case.[161] In the latter case, the IACHR affirmed:

> "131. Applying said criteria, this Court has underlined that the close relationship of indigenous peoples with the land must be acknowledged and understood as the fundamental basis for their culture, spiritual life, wholeness, economic survival, and preservation and transmission to future generations.
> [...]
> 135. The culture of the members of the indigenous communities directly relates to a specific way of being, seeing, and acting in the world, developed on the basis of their close relationship with their traditional territories and the resources therein, not only because they are their main means of subsistence, but also because they are part of their worldview, their religiosity, and therefore, of their cultural identity".[162]

---

158 I/A Court H.R., *Case of the Saramaka People v. Suriname*, Judgment of November 28, 2007; I/A Court H.R., *Case of* the *Moiwana* Community *v. Suriname*, Judgment of June 15, 2005.

159 CC. Decision C-295 of 2019. Diana Fajardo Rivera.

160 Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, paras. 1121.6.

161 IACHR Court. *Plan de Sánchez Massacre Case*. Reparations (art. 63.1 American Convention on Human Rights). Judgment of November 19, 2004. Series C No. 116, para. 85; *Case of Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay*. Merits, Reparations and Costs. Judgment of June 17, 2005. Series C No. 125, para. 147.

162 I/A Court H.R., Case of the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay. *Case of Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay*. Merits, Reparations and Costs. Judgment of June 17, 2005. Series C No. 125, paras. 131 and 135.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

Referring to Article 21 of the American Convention on Human Rights, the Inter-American Court of Human Rights determined that when indigenous communities are prevented from fully enjoying their collective property, which includes the right to the effective enjoyment of property, their culture and traditional practices are affected:

> "147. Disregarding the ancestral right of the members of the indigenous communities to their territories could affect other basic rights, such as the right to cultural identity and to the very survival of the indigenous communities and their members.
> (...)
> 154. To guarantee the right of indigenous peoples to communal property, it is necessary to take into account that the land is closely linked to their oral expressions and traditions, their customs and languages, their arts and rituals, their knowledge and practices in connection with nature, culinary art, customary law, dress, philosophy, and values. In connection with their milieu, their integration with nature and their history, the members of the indigenous communities transmit this nonmaterial cultural heritage from one generation to the next, and it is constantly recreated by the members of the indigenous groups and communities".[163]

Additionally, the Chamber of Recognition considered relevant[164] what was said by the African Court of Human Rights in the *African Commission on Human and Peoples' Rights v. Republic of Kenya*, in which it concluded that the forced displacement committed against the *Mau Ogiek* people constituted a violation of their human rights, such as the right to life and integrity and the right to freedom of worship, since the dependence of this people on their territory was violated.[165] The Court highlighted the violation of freedom of worship when the peoples are prevented from accessing their territories:

> "The Court notes that, in the context of traditional societies, where formal religious institutions often do not exist, the practice and profession of

[163] I/A Court H.R., Case of the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay. Case of Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay. Merits, Reparations and Costs. Judgment of June 17, 2005. Series C No. 125, paras. 147 and 154.
[164] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, paras. 1121.8.
[165] African Court of Human Rights, *African Commission on Human and Peoples' Rights v. Republic of Kenya, App. No. 006/2012*, Judgment, May 26, 2017, para. 160, cited by Matthew Gillett,

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

> religion are usually inextricably linked with land and the environment. In indigenous societies in particular, the freedom to worship and to engage in religious ceremonies depends on access to land and the natural environment. Any impediment to, or interference with accessing the natural environment, including land, severely constrains their ability to conduct or engage in religious rituals with considerable repercussion on the enjoyment of their freedom of worship".[166]

In Colombia, the norms recognize the profound interrelationship between indigenous peoples and their territory. Article 3 of Decree Law 4633 of 2011 establishes the definition of victims, including nature:

> "Article 3. Victims. For the purposes of this decree, victims are considered to be the indigenous peoples and communities as collective subjects and their individually considered members who have suffered damages as a consequence of serious and manifest violations of international human rights norms, fundamental and collective rights, crimes against humanity or violations of international humanitarian law due to events that occurred as of January 1, 1985 and that are related to underlying factors linked to the internal armed conflict.
> [...] For indigenous peoples, territory is a victim, taking into account their worldview and the special and collective bond that unites them with Mother Earth. Without prejudice to the foregoing, it shall be understood that the holders of rights within the framework of this decree are the indigenous peoples and communities and their members individually considered"[167] .

For the legal qualification of the conducts that affect the environment as an inhumane act, the Recognition Chamber valued what was said by the indigenous organizations[168] , which have mentioned that they prevented *" access to areas of communal, ecological, economic and cultural importance such as: aqueducts, planting areas, water sources, rivers,*

---

[166] African Court of Human Rights, *African Commission on Human and Peoples' Rights v. Republic of Kenya, App. No. 006/2012*, Judgment, May 26, 2017, para. 164.
[167] Decree Law 4633 of 2011.
[168] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Recognition of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, paras. 1121.14.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

forests, schools, sacred sites such as lagoons, mountains[169] "[170] , which seriously affected the spirituality of the peoples, because the moorlands:

> "constitute one of the most important sacred sites for the Nasa People, they are ksxa'w yat ("house of the spirits"), since it is where the kiwe thë'j ("ancestral wise men" or "traditional doctors") find the plants for the elaboration of remedies, as well as the space where they gather to dialogue with the spirits that inhabit the three spaces mentioned in the previous section"[171] .

The Recognition Chamber, in application of the ethnic and territorial approaches, took into account the observations presented by the representation of the victims, in which they explained the serious suffering caused to the communities of the Nasa People[172] :

(i) No offerings or rituals could be made in the moors[173] . In this sense, the destruction of sacred spaces puts spiritual practice at risk[174] . Harmonizations were made in the sacred sites, now it is not possible[175] . In this sense, this implied the violation of access to sacred places and consequently religious freedom as a collective right .[176]

(ii) Mass graves, anti-personnel mines, unexploded ordnance and landslides caused by bombings are serious disharmonies that threaten the integrity of the Nasa People in general, since the destruction of a house of spiritual beings is taking place .[177]

(iii) Without access to the sacred sites, there is no way to harmonize the territory[178] , so it was not possible to work the land harmoniously. The fighting and minefields

---

[169] Personería Municipal de Jambaló.
[170] Comments submitted by the proxies of the indigenous organizations, p. 92.
[171] Observations submitted by the Ancestral Authorities, p. 18.
[172] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, paras. 1121.15-1121.17.
[173] Observations submitted by the Ancestral Authorities, p. 19.
[174] Comments submitted by the proxies of the indigenous organizations, p. 46.
[175] Observations submitted by the representatives of the indigenous collective victims, p. 176.
[176] Observations presented by the victims and authorities of the black communities of Northern Cauca and Southern Valle del Cauca represented by the Afro-Colombian Agency Hileros, p. 30.
[177] Observations submitted by the Ancestral Authorities, p. 19.
[178] Ancestral Authorities Observations to Auto 01 of 2023 ADHC Case 005; p. 20.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

prevented access to usable land, affecting the livelihoods of several families. The slashing, planting and harvesting cycles were also interrupted:

> "Because of the fighting and the minefields, many lands that could be used for family sustenance could not be worked, and it was not possible to carry out the spiritual protection work that families do on their lands. Due to the permanent intervention of the armed groups, game animals were hidden. Due to the difficulties in communicating between communities, native seeds were lost. The cycles of sowing, planting and harvesting were interrupted by the constant armed interventions, preventing us from following the path of the moon for our agricultural activities. In general, there was a chain of affectations that prevented the harmonious work of the land and a growing dependence on State institutions for survival"[179] .

(iv) By leaving murdered people buried in sacred sites, disharmony is being sown from precisely where the source of well-being for all beings in the territory was found .[180]

(vi) Native seeds were lost[181] . Likewise, the victims have mentioned that it was also made impossible to access their medicinal plants .[182]

The Chamber also referred to the spiritual interrelationship that exists between the Nasa people and their territory[183] , summarized by the victims themselves as follows:

> "This is an inherent relationship with nature, that is why the Nasa feels its sadness, its pains, its joys. In turn, mother earth feels the sufferings, fears, pains and joys of the community"[184] .

---

[179] Ancestral Authorities Observations to Auto 01 of 2023 ADHC Case 005; p. 21.
[180] Observations submitted by the Ancestral Authorities, p. 19.
[181] Observations submitted by the Ancestral Authorities, p. 21.
[182] Third minga de pensamiento alrededor del fogón para la construcción de observaciones al primer ADHC, developed in the Tulpa de CRIC, Territorio Sat Tama Kiwe - Resguardo Kweth ki'na las Mercedes, municipality of Caldono, May 8 and 9, 2023. Report document, p. 27.
[183] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1121.16.
[184] Comments submitted by the proxies of the indigenous organizations, p. 89.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

In its observations, the Afro-Colombian Hileros Corporation, an organization that represents most of the Afro-descendant Community Councils recognized as victims in Case 05, mentioned the serious affectation they felt by not being able to access sacred places found in nature and which also violate religious freedom :[185]

> "In the case of ethnic communities, this practice implied the violation of access to sacred places and, consequently, of religious freedom as a collective right. The impacts of this practice extend to the violation of the right to the family, to economic development and, in itself, to the disappearance of traditional economic practices"[186] .

The Chamber of Acknowledgment emphasized that the defendants themselves recognized that there were *"ruptures in the relationship with sacred sites and the free transit through them"*[187] . Likewise, this was also affirmed in the voluntary versions in Case 05:

> "**Defendant Heriberto Reina Suaza**: "As third in command of the [Jacobo Arenas Mobile Column] between 1998 to 2012, I recognize that the presence of the structure in territory had psycho-spiritual impacts for the indigenous and Afro-descendant communities and that our presence and use of explosives represents violence, disharmony and suffering for the territory by burying explosives, digging trenches and settling our camps and burying bodies of informants and shot combatants; For the indigenous and Afro-descendant communities, it represented ruptures in their relations with sacred places and their free transit through them"[188] .

---

[185] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1121.17.

[186] Observations of the Afro-Colombian Corporation Hileros to Auto 01 of 2023, p. 30: "Of the municipalities prioritized in the case, for the Afro-descendant communities, according to the information provided in the reports submitted to the Jurisdiction, the pattern of confinement was presented by the CM JA in the municipalities of Puerto Tejada, Suarez, Padilla, Caloto and Buenos Aires. Part of the dynamics used to exercise territorial control through confinement consisted of the imposition of schedules, prohibition or impossibility to attend religious or essential places for the community, such as rivers. Another of the strategies used was the use of MAP in the territory.

[187] Observations of the defense of former combatants, p. 215; Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1121.18.

[188] Observations of the defense of former combatants, p. 215.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

Additionally, in the course of the investigation of Case 05, a defendant stated that the FARC-EP was responsible for the confinement of the Nasa population due to the use of explosive devices that destroyed nature and generated fear among the population, due to the risk of their detonation. Among the effects, he recognized that the antipersonnel mines "*were buried in ancestral territories and no access was allowed to the lagoons, so important for the cosmovision of the Nasa indigenous people*".

The Chamber concluded that in addition to the destruction of the environment resulting from the use of indiscriminate explosives such as anti-personnel mines or tatucos, there is the exploitation of nature that threatens the cosmovision of the peoples, when it is carried out in their territory. In these cases, illegal mining and illicit crops generate great mental suffering among the people. When these practices are opposed by the people, they are met with threats, forced displacement and other violent crimes.[189]

Regarding the subjective element required for the commission of the crime of other inhumane acts, the Chamber recalled what was said by the ICTY in the cases of Prosecutor v. Krnojelac and Prosecutor v. Blagojević and Jokić, in which it was noted that inhumane acts could be committed by action or omission, as well as the level of knowledge and intent required to commit this type of act :[190]

> " The required mens rea is met where the principal offender, at the time of the act or omission, had the intention to inflict serious physical or mental suffering or to commit a serious attack on the human dignity of the victim, or where he knew that his act or omission was likely to cause serious physical or mental suffering or a serious attack upon human dignity and was reckless as to whether such suffering or attack would result from his act or omission."[191] .

---

[189] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1121.19.

[190] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1121.20.

[191] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Recognition of Truth, Responsibility and the Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1121.21; ICTY, *The Prosecutor v. Krnojelac*, Case No. IT-97-25-T, Trial Judgment, para. 132; ICTY, *The Prosecutor v Blagojević and Jokić*, Case No. IT-02-60-T, Trial Judgment, 17 January 2005, para. 624.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

Therefore, the Chamber of Recognition concluded that in Case 05, the defendants knew that their action or omission could cause various forms of suffering or constitute a serious attack on the human dignity of the victim(s) and, with that knowledge, acted or failed to act .[192]

With the above considerations, the Recognition Chamber concluded that the practices of the FARC-EP that destroyed the environment simultaneously affected the mental integrity of the ethnic peoples of the area. The conclusion is derived from a complete understanding of the intellectual, moral and cultural link that exists between the peoples and their territory. Thus, damage to nature implies an attack on the very existence of the peoples. The former FARC-EP combatants were aware of the worldview of the peoples and the importance of nature and territory for them.

The serious attacks against the mental integrity of the indigenous and Afro-descendant peoples of northern Cauca and southern Valle del Cauca derived from: (i) the effects on the territory with anti-personnel mines, detonated and unexploded explosives and attacks on the sacred sites of the communities; (ii) the effects of illegal mining and agricultural conversion for the production of illicit crops.

The decision to establish the facts lists the facts reported by the communities:[193]

1. The impact on the moorlands of Miranda and Florida, where armed groups indiscriminately cut down vegetation and destroyed the territory with landmines and anti-personnel mines
2. In the Honduran reservation, the FARC-EP left detonated and unexploded ammunition on the territory, as well as improvised explosive devices.
3. Mines found in 2021 in the La María sector of the La Aguada reservation in San Antonio de Caldono.
4. Improvised explosive devices left in the Honduran indigenous reservation. Five wired devices were found, plus other charges in the same area.
5. Indiscriminate destruction of nature caused in Morales by the FARC-EP with the use of improvised explosive devices.

---

[192]ICTY, The Prosecutor v. Krnojelac, Case No., para. 132; ICTY, *The Prosecutor v Blagojević and Jokić*, Case No. IT-02-60-T, Trial Judgment, 17 January 2005, para. 624.

[193] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgement of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Sub-Chamber G, Decision No. 002 of 2024, para. 601 et seq.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

6. Abandonment of an improvised explosive device on July 30, 2012, in the El Tablón sector, Corinto, Cauca.
7. Abandonment of ammunition and war debris in the Huellas Reservation, Caloto, Cauca, affecting the community's livestock watering holes and causing disease in the animals.
8. Planting of anti-personnel mines and abandonment of improvised explosive devices in Jambaló, Cauca. Reports relate more than 200 improvised devices, hundreds of .75 and .5 caliber casings, detonation cords and explosive cylinders.
9. The damming of the water tributary that supplies the aqueduct located in the Miraflores de Miranda Hacienda, Cauca, which directly affected the water resources in the area.
10. Militarization, the planting of anti-personnel mines and the existence of unexploded ordnance in the Cerro de Belén de Caldono, Cauca, which is a sacred site for the communities.
11. A defendant acknowledged that the planting of mines in Laguna San Rafael, a sacred site for the communities, affected the territory and the people.
12. The FARC-EP levied taxes on illegal mining and the planting of illicit crops. The FARC-EP defendants acknowledged that they had territorial control over the areas where these illegal economies were practised and that these activities would not have been possible without the collection of taxes.[194]

The report "Learning to balance life and heal Uma Kiwe (Mother Earth), Ancestral Territory Cxhab Wala Kiwe - Annex to the first report on the effects on life in the context of the armed conflict "the past... the war, the hope, the good life" presented to this Jurisdiction by the Association of Indigenous Councils of Northern Cauca (ACIN), specifies relevant aspects of the Nasa People's worldview and the mental and cultural suffering generated by the destruction of nature:

> "It is important to point out that from the Nasa worldview, the origin of the world comprises three indissoluble living spaces: Ëe Kiwe (space above), Naa Kiwe (space in the middle), Kiwe Dxiju (space below).
> Physical beings inhabit the middle space and the higher and lower spaces are home to the higher spirits that help to preserve balance and harmony. Therefore, any disharmony, damage or harm caused by physical beings

[194] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Recognition of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Sub-Chamber G, Decision No. 002 of 2024, para. 616.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

against nature or among themselves will have a negative impact, first of all on the territory, secondly to families and finally to the whole community, given the interdependence and relationship of the living spaces in question".[195]

III. Destruction of Mother Nature as a war crime

The Recognition Chamber of the SJP, in Cases 02 and 05 determined that the destruction of the environment can be considered a war crime[196] . The Chamber established that there are two war crimes of the Rome Statute of the ICC that are applicable to the cases studied by the Chamber

First, in the two Autos de Determinación de Hechos del Caso 05, in which the former members of the FARC-EP who were present in the departments of Cauca and Valle del Cauca were accused of committing international crimes, the Chamber considered that the destruction of nature could be considered a criminal act in accordance with Article 8(2)(e)(xii): Destroying or seizing property of an adversary, unless the necessities of the conflict make it imperative. [197]

On the other hand, in the Decision of Findings of Fact in Case 02[198] and the second Decision of Findings of Fact in Case 05[199] , the Chamber considered that these conducts could also be considered war crimes under Article 8(2)(e)(iv): Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, the arts, sciences or charity,

---

[195] ACIN - Report "Conociendo para equilibrar la vida y sanar a Uma Kiwe (Madre Tierra), Territorio Ancestral Cxhab Wala Kiwe", p. 10.

[196] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Decision No. 01 of 2023, para. 1006; and Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1259.

[197] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Decision No. 01 of February 1, 2023, paras. 1005 et seq; and Subsection G, Decision No. 002 of 2024, paras. 1284 et seq.

[198] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Decision No. 03 of July 5, 2023, paras. 1651 et seq.

[199] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1343 et seq.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

historical monuments, hospitals and other places where the sick and wounded are grouped, provided they are not military objectives.[200]

The International Committee of the Red Cross has pointed out that the environment must be considered a civilian good and as such cannot be attacked unless it becomes a legitimate military objective.[201] Since the 1976 *Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques*, IHL has made specific reference to the protection of the environment. The First Additional Protocol to the Geneva Conventions also made express mention of the protection of the environment and from it derives the wording of the criminal rules relating to the means and methods of warfare affecting nature[202] . Article 35(3) of the aforementioned protocol states:

> "Article 35 - Basic rules
> (3) It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment".[203]

For its part, Article 55 of Additional Protocol I created the obligation to ensure the protection of the natural environment against extensive, long-lasting and severe damage, prohibiting the use of means and methods that result in such damage, due to the effects they have on the health and survival of the population[204] . The article also prohibited reprisals aimed at affecting the natural environment.[205]

---

[200] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1349.2. 2.
[201] ICRC, Guidelines for the Protection of the Environment in Times of Armed Conflict, 1994.
[202] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1296.
[203] Protocol Additional to the Geneva Conventions of August 12, 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), June 8, 1977, Article 35(3).
[204] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1296.
[205] Protocol Additional to the Geneva Conventions of August 12, 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), June 8, 1977, Article 55: "*Article 55 - Protection of the natural environment*
1. In the conduct of war, care shall be taken to protect the natural environment against widespread, long-term and severe damage. This protection includes the prohibition of the use of methods or means of warfare which are designed to cause or may be expected to cause such damage to the natural environment, thereby endangering the health or survival of the population.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

As Demeyere[206] points out, since 2010 the academic and professional community around IHL focused more strongly on the protection of the environment, and 2020 marked a turning point for the protection of nature because of two important situations. First, the UN International Law Commission adopted its Principles on the Protection of the Environment in Relation to Armed Conflict. These were adopted by resolution of the UN General Assembly on December 7, 2022[207] . Secondly, the International Committee of the Red Cross updated its Guidelines on the Protection of the Natural Environment in Armed Conflict in 2020.[208] For Demeyere, the most important current need is to operationalize the existing legal framework of IHL in favor of the protection of the natural environment, taking into account the time elapsed since the regulation of this issue in the 1970s.[209]

Since the 1970s, numerous international norms and resolutions have been issued requiring international environmental protection. These include the Ottawa Convention of 1997[210] , the United Nations General Assembly Resolution 47/37 of 1993[211] , the United Nations Environment Program Resolution UNEP EA.2/RES.15 of the United Nations Environment Program[212] , Resolutions 1306 (2000), 1457 (2003) and 1856 (2008) of the

---

2. Attacks against the natural environment as retaliation are prohibited."

[206] Demeyere, Bruno, "Editorial. Protection of the Environment During Armed Conflict," *International Review of the Red Cross* (2023), 105 (924), 1167. See also Ramírez and Saavedra, "Derecho Internacional Humanitario y la protección del medio ambiente: nuevas perspectivas para Colombia" in Solano, Losada and Osorio (Eds.), *Desafíos del derecho internacional humanitario en Colombia: aspectos filosóficos, hermenéuticos, constitucionales y ambientales. Volume II*, Universidad Externado de Colombia, 2022, pp. 496 et seq.

[207] United Nations (UN), General Assembly, Resolution 77/104: "*Protection of the environment in relation to armed conflict*", December 7, 2022, Annex.

[208] ICRC, Guidelines on the Protection of the Natural Environment in Armed Conflict: Rules and Recommendations Concerning the Protection of the Natural Environment under International Humanitarian Law, With Commentary, Geneva, 2020.

[209] Demeyere, Bruno, "Editorial. Protection of the Environment During Armed Conflict," *International Review of the Red Cross* (2023), 105 (924), 1168.

[210] On the environmental concerns taken into account for this international treaty see Fleck, Dieter: "Legal Protection of the Environment", Stahn, Carsten; Iverson, Jens and Easterday, Jennifer, *Environmental Protection and Transitions from Conflict to Peace*, Oxford: Oxford University Press, 2017.

[211] In this resolution, the General Assembly affirmed: "*that certain means and methods of warfare can have disastrous effects on the environment*". The resolution urges States to take the necessary decisions for the protection of the environment in armed conflicts.

[212] This resolution emphasized: "*the critical importance of protecting the environment at all times, especially in times of armed conflict, and of restoring it in post-conflict situations, including the unintended side effects of human displacement resulting from armed conflict*.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

United Nations Security Council, which have highlighted the relationship between the exploitation of natural resources and the financing of armed conflicts , and the "Second Report on the Protection of the Environment in Relation to Armed Conflict" of the International Law Commission.[213] We should also highlight the Stockholm Declaration of 1972, which recalls that nature is essential for human well-being and the enjoyment of human rights.[214]

The International Committee of the Red Cross (ICRC) has identified a number of rules of customary international law related to the protection of the environment.[215] Pursuant to these rules, environmental protection restricts the manner in which armed actors conduct hostilities[216] . Customary IHL Rule 43, applicable in non-international armed conflicts, states:

> " Rule 43. The general principles on the conduct of hostilities apply to the natural environment:
> A. No part of the natural environment may be attacked, unless it is a military objective.
> B. Destruction of any part of the natural environment is prohibited, unless required by imperative military necessity.
> C. Launching an attack against a military objective which may be expected to cause incidental damage to the environment which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated is prohibited".[217]

Norms 44 and 45 of international humanitarian custom are also of particular relevance in the scenario of the conduct of hostilities[218] . Their applicability, although questioned for

---

[213] International Law Commission, Second Report on the Protection of the Environment in Relation to Armed Conflict, pp. 11 et seq.
[214] UN, Stockholm Declaration, 1972. See: https://www.un.org/es/conferences/environment/stockholm1972.
[215] International Committee of the Red Cross (ICRC), Customary IHL Database, Rules 43, 44 and 45. Available at: https://ihl-databases.icrc.org/es/customary-ihl/v1.
[216] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1260.
[217] ICRC, Customary IHL Database, Rule 43. Available at: https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule43
[218] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1270.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

non-international armed conflicts, is confirmed in Colombia by the implementation of criminal norms related to the destruction of the natural environment[219] . These norms, as we shall see, are broader than those typified in the Rome Statute of the International Criminal Court. The cited norms state:

> " Rule 44. Methods and means of warfare must be employed with due regard to the protection and preservation of the natural environment. In the conduct of military operations, all feasible precautions must be taken to avoid, and in any event to minimize, incidental damage to the environment. Lack of scientific certainty as to the effects on the environment of certain military operations does not absolve a party to the conflict from taking such precautions.
>
> Rule 45. The use of methods or means of warfare that are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment is prohibited. Destruction of the natural environment may not be used as a weapon".[220]

Customary rules clarify that the IHL principles of distinction, necessity and proportionality are applicable during military operations that may impact the environment and its rights[221] . This was confirmed by the International Court of Justice in its advisory opinion on the legality of the threat or use of nuclear weapons, weighing military necessity against environmental protection.[222] The application of these principles does not outright prohibit military operations, but only those in which the environment cannot be considered as a military objective[223] . There will be situations in which an

---

[219] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1270.
[220] ICRC, Customary IHL Database, Rules 44 and 45.
[221] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1261.
[222] International Court of Justice, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. reports 1996, July 8, 1996, para. 30: "Respect for the environment is one of the elements to be taken into account in determining whether an action is in conformity with the principles of necessity and proportionality."
[223] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1262.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

imperative military necessity authorizes environmental damage, for example, when one of the parties to the conflict uses nature for shelter, concealment or camouflage.[224]

From the perspective of IHL, the environment can be considered a civilian good and, as we shall see below, an adversary good. In 1994 the ICRC published the Guidelines for the Protection of the Environment in Times of Armed Conflict, in response to a request from the United Nations General Assembly. As noted above, this document was updated in 2020 and translated into Spanish in 2022. This document also provides insight on this issue:

> "(8) Destruction of the environment not justified by military necessity violates international humanitarian law. Under certain circumstances, such destruction is punishable as a grave breach of international humanitarian law.
> (9) The general prohibition on destroying civilian objects, unless such destruction is justified by military necessity, also protects the environment".[225]

The consideration of the environment as an asset sheds light on its protection under IHL, taking into account the limits set by the principle of military necessity.[226] A destruction of property that is not justified by this principle, in accordance with the Fourth Geneva Convention, could be considered a grave breach of IHL and therefore a war crime in international armed conflicts[227] . In addition, Rule 50 of the customary rules of IHL, which according to the ICRC would be applicable in internal conflicts[228] . Rule 50 of customary

[224] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Recognition of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1262.
[225] ICRC, Guidelines for the Protection of the Environment in Times of Armed Conflict, 1994. UN Doc. A/49/323, 19 August 1994, Annex, p. 49–53.
[226] See, for example, Article 147 of the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Armed Conflict, which states that "*the destruction and appropriation of property not justified by military necessity and carried out on a large scale in an unlawful and arbitrary manner*" may be considered a grave breach of IHL and, therefore, a war crime.
[227] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1265.
[228] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1266.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

IHL provides that *"The destruction or seizure of the property of an adversary is prohibited, unless required by imperative military necessity"*.[229]

The principle of proportionality also restricts the manner in which military operations that may cause damage to nature are carried out[230] . In analyzing the principle of proportionality with respect to environmental damage, the ICTY Prosecutor stated *that "to satisfy the requirement of proportionality, attacks against military targets which are known or can reasonably be assumed to cause grave environmental harm may need to confer a very substantial military advantage in order to be considered legitimate"*.[231] Rule 43 of customary IHL would confirm that destruction to the environment that is excessive in relation to the direct and concrete military advantage[232] sought is disproportionate and in violation of IHL.[233]

Another facet of nature can be seen from the cultural perspective. In this area, IHL also has various norms that are of special importance and that were taken into account by the SRVR in the first Decision of Determination of Facts in Case 02. It is important to mention the provisions of Article 53 of Additional Protocol I to the four Geneva Conventions, which establishes that it is prohibited *"to commit any acts of hostility directed against the historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples"*.[234] For its part, paragraph 4 of Article 85 of the same protocol raises these attacks to the level of seriousness of grave breaches of IHL and, ultimately, giving them the rank of war crimes applicable in international armed conflicts. Article 16 of Additional Protocol II to the Geneva Conventions has a similar provision, which serves

---

[229] ICRC, Customary IHL Database, Rule 50.

[230] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Recognition of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1269.

[231] ICTY, Final report to the prosecutor by the committee established to review the NATO bombing campaign against the Federal Republic of Yugoslavia, paragraph 22. Available at: https://www.icty.org/en/press/final-report-prosecutor-committee-established-review-nato-bombing-campaign-against-federal.

[232] Usually defined as that which provides a "*substantial and relatively proximate interest, disregarding advantages that are not perceptible or manifest only in the long term*". See SANDOZ, Y/ SWINARSKI, C./ ZIMMERMAN, B.: Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (Protocolo I), Bogotá: ICRC y Plaza y Janés Editores Colombia, para. 2209. Cited in ICRC, Customary IHL Database, Rule 14.

[233] ICRC, Customary IHL Database, Rule 43.

[234] Protocol Additional to the Geneva Conventions of August 12, 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), June 8, 1977, Article 53.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

as a basis for its inclusion in the Statutes of the International Criminal Tribunals that have criminalized the conduct.

The ICRC has also identified rules of international humanitarian custom that are applicable in the context of an internal conflict to cultural property. Rules 38, 39 and 40 of customary law state that:

> "Rule 38. Each party to the conflict must respect cultural property:
> A. Special care must be taken in military operations to avoid damage to buildings dedicated to religion, art, science, education or charitable purposes and historic monuments unless they are military objectives.
> B. Property of great importance to the cultural heritage of every people must not be the object of attack unless imperatively required by military necessity
>
> Rule 39. The use of property of great importance to the cultural heritage of every people for purposes which are likely to expose it to destruction or damage is prohibited, unless imperatively required by military necessity".
>
> Rule 40. Each party to the conflict must protect cultural property:
> A. All seizure of or destruction or wilful damage done to institutions dedicated to religion, charity, education, the arts and sciences, historic monuments and works of art and science is prohibited.
> B. Any form of theft, pillage or misappropriation of, and any acts of vandalism directed against, property of great importance to the cultural heritage of every people is prohibited".[235]

As can be seen, from the perspective of IHL, nature can be considered an asset, and above all a civilian asset[236] , and also part of the cultural heritage of peoples[237] . It can only be

[235] ICRC, Customary IHL Database, Rules 38, 39 and 40.
[236] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Recognition of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Decision No. 01 of 2023, para. 1025.
[237] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, paras. 1343 to 1347; 1349.2.1 and 135.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

attacked in exceptional circumstances, an imperative military advantage[238] . Next, we will refer to International Criminal Law applicable to internal armed conflicts and the treatment that this branch of law can give to the problem.

The conditions for a violation of IHL to be of such gravity as to be considered a war crime were given in the 1995 decision on jurisdiction in the case of Prosecutor v. Dusko Tadić of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. This decision has been described by Scharf as a Grotian moment in the international law applicable to war crimes, referring to Hugo Grotius.[239] The conditions, cumulative in nature, are as follows:

> (i) the violation must constitute an infringement of a rule of international humanitarian law;
> (ii) the rule must be customary in nature or, if it belongs to treaty law, the required conditions must be met;
> (iii) the violation must be "serious", that is to say, it must constitute a breach of a rule protecting important values, and the breach must involve grave consequences for the victim. Thus, for instance, the fact of a combatant simply appropriating a loaf of bread in an occupied village would not amount to a "serious violation of international humanitarian law" although it may be regarded as falling foul of the basic principle laid down in Article 46, paragraph 1, of the Hague Regulations (and the corresponding rule of customary international law) whereby "private property must be respected" by any army occupying an enemy territory;
> (iv) the violation of the rule must entail, under customary or conventional law, the individual criminal responsibility of the person breaching the rule"[240].

---

[238] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1284.7.

[239] Scharf, Michael, "How the Tadic Appeals Chamber Decision Fundamentally Altered Customary International Law," in Sterio and Scharf (Eds.), *The legacy of ad hoc tribunals in international criminal law*, Cambridge University Press, 2019, pp. 59ff.

[240] ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadić, Decision on Interlocutory Appeal on Jurisdiction, ICTY- 94- 1-AR72, 2 October 1995, para. 94.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

The Rome Statute criminalizes certain conduct that violates common Article 3 of the four Geneva Conventions[241] , as well as other violations of the laws and customs applicable in internal conflicts.[242] Moreover, Article 8(2)(b)(iv) of the Statute criminalizes the intentional launching of an attack knowing that it will cause damage to the natural environment when such damage is manifestly excessive in relation to the concrete military advantage:

> "(iv)Intentionally launching an attack in the knowledge that such attack will cause incidental loss of life or injury to civilians or damage to civilian objects or widespread, long-term and severe damage to the natural environment which would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated"[243]

This crime, although it does not find an analogous provision in the paragraphs corresponding to war crimes in internal conflicts, has been typified in the Colombian criminal code, with some differences[244] . In this regard, we should mention the International Committee of the Red Cross, in its database on customary IHL, which states that international practice on war crimes "*This practice does not exclude the possibility that a State may define under its national law other violations of international humanitarian law as war crimes*[245]

As already mentioned, the environment in the law of armed conflict, in addition to enjoying autonomous protection, has a legal regulation through the law of property[246] . Therefore, in the case of internal conflicts, the protection of the environment can also occur through crimes related to the protection of property[247] , which does not exclude the

---

[241] Rome Statute of the International Criminal Court, Article 8(2)(c).
[242] Rome Statute of the International Criminal Court, Article 8(2)(e).
[243] Rome Statute of the International Criminal Court, Article 8(2)(b)(iv).
[244] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgement of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, paras. 1283 and 1284.3
[245] ICRC, IHL Database, Customary Law, Rule 156.
[246] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Recognition of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para.1284.1.
[247] Gillett, Matthew and Lostal, Marina, *Report on Prosecuting Environmental Harm before the Special Jurisdiction for Peace (JEP)*, 2023. See also Gillett, Matthew, Prosecuting Environmental Harm before the International Criminal Court, Cambridge University Press, 2021, pp. 120-121.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

importance of its autonomous protection but rather highlights the pluriofensive nature of this type of conduct.[248]

In view of the above, the first Decision of Determination of Facts and Conduct in Case 05 ruled that crimes committed against nature could be criminalized in accordance with Article 8(2)(e)(xiii) of the Rome Statute, which states that it shall be a war crime to "*Destroy or seize property of an adversary, unless the necessities of the conflict make it imperative*".[249] The International Criminal Court's Elements of Crimes document establishes the following as elements of this crime:

> "Article 8 (2) (e) (xii) War crime of destroying or seizing the enemy's property Elements
> 1.The perpetrator destroyed or seized certain property.
> 2. Such property was property of an adversary.
> 3. Such property was protected from that destruction or seizure under the international law of armed conflict.
> 4. The perpetrator was aware of the factual circumstances that established the status of the property.
> 5. The destruction or seizure was not required by military necessity.
> 6. The conduct took place in the context of and was associated with an armed conflict not of an international character.
> 7. The perpetrator was aware of factual circumstances that established the existence of an armed conflict".[250]

As can be seen, while the Spanish translation of the Rome Statute defines the victims of the crime as "adversaries"[251] , the translation of the same article in the Elements of Crimes uses the word "enemies", more typical of international armed conflicts. In this case, the term used in the Rome Statute should be preferred, by virtue of the provisions of Article 21, on the sources applicable by the International Criminal Court.[252]

---

[248] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1284.4

[249] Rome Statute of the International Criminal Court, Article 8(2)(e)(xii).

[250] Elements of Crimes, Article 8(2)(e)(xii).

[251] See, Boddens Hosang, Hans, "13. Article 8(2)(b)(xiii)-Destroying or Seizing the Enemy's Property" in Lee, Roy S.,*The International Criminal Court. Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, Transnational Publishers, 2001, pp. 170-172.

[252] "Article 21 Applicable law

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

The ICC has interpreted this crime and has stated that for it to be committed, the property destroyed, by act or omission, must *"belong to individuals or entities aligned with or with allegiance to a party to the conflict adverse or hostile to the perpetrator"*.[253] The property in question may be public or private and movable or immovable, which is applicable to certain natural resources that are part of the environment.[254] This crime not only applies when the attack is specifically directed against a military objective, but also when it is directed against civilian property, such as nature.[255] The first instance judgment in the case of the Prosecutor v. Germain Katanga at the ICC has clarified that what is truly essential to this crime is that the property, public or private, belongs to a person or persons adverse to the armed group.[256] This character of "adversary" can be based on the very categorization that the armed group, which destroys or appropriates the property, makes of the persons attacked, without it being necessary that they objectively belong to one of the parties to the conflict[257] . This is even clearer if one takes into account that Article 8(2)(e)(xii) includes civilian property as that which can be attacked, since it does not differentiate between "adversary combatants" and "civilian adversaries", as does Article 8(2)(e)(ix) of the ER.[258]

The meaning to be given to the word adversary is better understood when one also considers Article 49 of Additional Protocol I to the Geneva Conventions, which defines the notion of attack in IHL as "*acts of violence* [committed against] *an adversary, whether offensive or defensive*".[259] Bearing in mind that the persons and property protected by IHL

---

1. The Court shall apply:
(a) First, this Statute, the Elements of Crimes and its Rules of Procedure and Evidence...".

[253] ICC, The Prosecutor v. Katanga, Decision Confirming Charges, ICC-01/04-01/07, 30 September 2008, para. 310.

[254] Gillett, Matthew and Lostal, Marina, *Informe sobre imputación de daños medioambientales ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)*, 2023, p. 33.

[255] ICC, The Prosecutor v. Katanga, Decision Confirming Charges, ICC-01/04-01/07, September 30, 2008, para. 311.

[256] ICC, The Prosecutor v. Katanga, Trial Judgment, ICC-01/04-01/07, 7 March 2014, para. 892.

[257] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Recognition of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1284.5.

[258] Rome Statute of the ICC, Article 8(2)(e)(ix): "Treacherously killing or wounding an adversary combatant".

[259] Additional Protocol I of 1977, Article 49.1.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

are primarily civilians, it would be counterintuitive to state that attacks against fighting adversaries are criminalized, as this would render most of the provisions inapplicable.[260]

The qualification of damage to nature based on Article 8(2)(e)(xii) was recently welcomed in the ICRC's most recent "*International Review*," devoted especially to the topic of environmental protection.[261] Gillett notes that "[t]he *provision with the greatest potential for application is Article 8(2)(e)(xii), which prohibits destroying or confiscating an adversary's property*." In various sections of the review, mention is made of developments in SRVR Cases 02 and 05.[262]

We will now refer to the second alternative proposed by the SRVR to qualify damages to Mother Earth under international criminal law. Taking into account the relationship that exists between indigenous peoples, Afro-Colombian and peasant communities with their territory, in Case 02 the SRVR considered that the destruction of territory can be qualified in accordance with Article 8(2)(e)(iv) of the Statute of Rome. This article states that it shall be a war crime to "[i]*ntentionally attack buildings dedicated to religion, education, arts, science or charity, historical monuments, hospitals and other places where the sick and wounded are gathered, provided that they are not military objectives*.

The imputation starts from a fundamental idea for a proper understanding of the effects of violence on ethnic peoples:

> "1765. Peoples and communities do not divide life into two ontologically distinct categories: nature, on the one hand, and culture, on the other. Nor do they conceive life according to the binary oppositions that arise from this separation, such as bio and geo, subject and object, sentient and inert,

[260] Coco, Antonio, Guerrilla Attacks on Towns (Tomas Guerrilleras) in International Criminal Law, 2023, pp. 6-7.
[261] Gillett, Matthew, "Criminalizing reprisals against the natural environment", in *International Review of the Red Cross*, Volume 105, Number 924, (2023), p. 1490.
[262] See also Sjöstedt and Hulme, "Re-evaluating international humanitarian law in a triple planetary crisis: New challenges, new tools": in *International Review of the Red Cross*, Volume 105, Number 924, (2023), p. 1260: "*In a series of landmark resolutions, the SJP has declared that various indigenous territories are considered "victims" of the armed conflict. Territory should not be considered simply in the sense of Western notions of property or land rights, but as encompassing the environment, human and non-human beings, including the spiritual, and their interaction. The recognition of these specific territories as victims means that they will have legal rights, including access to justice, truth and reparations*." (Own translation).

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

> spiritual and secular. Heterogeneously for many of the communities that are part of the diversity of rural worlds in the country, these separations do not exist in such a way".[263]

The elements of the crime of destruction of cultural property are detailed in the elements of crimes document as follows: "1. That the perpetrator has launched an attack. 2. That the attack was directed against one or more buildings dedicated to religion, education, arts, sciences or charity, historical monuments, hospitals or places where the sick and wounded are gathered and which are not military objectives. 3. That the perpetrator intended to direct the attack against such buildings dedicated to religion, education, the arts, sciences or charity, historical monuments, hospitals or places where the sick and wounded are gathered and which are not military objectives".[264]

As recalled in the Decision of Determination of Facts of Case 02, IHL protects cultural property since the Hague Conventions of 1907 and the report delivered by the Commission on Responsibilities of the First World War of 1919, which affirmed that the indiscriminate destruction of cultural property was a war crime.[265] As already mentioned in the section on IHL, Article 16 of Additional Protocol II prohibits attacks on cultural property. The first instance decision in the case of Prosecutor v. *Al Mahdi* considered that an attack, in the terms of Article 8(2)(e)(iv) of the Rome Statute, could be considered a hostile act committed against protected property committed during or after the conduct of hostilities.[266]

The Recognition Chamber recalled that the definition of cultural property is found in Article 1 of the 1954 Hague Convention[267] :

---

[263] Chamber for the Recognition of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Auto No. 03 of July 5, 2023, Determinar los hechos y conductas ocurridas en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas cometidos por quienes fueron integrantes de la extinta guerrilla de las FARC-EP, para. 1765, p. 582.

[264] Elements of Crimes of the International Criminal Court, Article 8(2)(e)(iv).

[265] International Criminal Court, *The Prosecutor v. Al-Madhi*, ICC-01/12-01/15, Trial Judgment, 27 September 2016, para. 14.

[266] International Criminal Court, *The Prosecutor v. Al-Madhi*, ICC-01/12-01/15. Trial Judgment, 27 September 2016, para. 15.

[267] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1349.1.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

> "Article 1 - Definition of cultural property: The term "cultural property" shall cover, irrespective of origin or ownership:
>
> (a) movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of every people, such as monuments of architecture, art or history, whether religious or secular; archaeological sites; groups of buildings which, as a whole, are of historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest; as well as scientific collections and important collections of books or archives or of reproductions of the property defined above;
> (b) buildings whose main and effective purpose is to preserve or exhibit the movable cultural property defined in sub-paragraph (a) such as museums, large libraries and depositories of archives, and refuges intended to shelter, in the event of armed conflict, the movable cultural property defined in sub-paragraph (a);
> (c) centers containing a large amount of cultural property as defined in sub-paragraphs (a) and (b), to be known as "centers containing monuments".[268]

The ICRC's interpretation of Article 16 of the Second Additional Protocol to the Geneva Conventions defines cultural sites as those that *" These are places which have a spiritual importance independently of their cultural significance, and express the belief of a people"*.[269] For the Special Rapporteur of the Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities and Chairperson of the Working Group on Indigenous Peoples of the UN Commission on Human Rights, by heritage of a people we should understand "*everything that forms part of the characteristic identity of a people, which it can share, if it wishes, with other peoples. This expression encompasses all that is considered in international law to be the creation of human thought and skill, such as songs, stories, scientific knowledge and works of art, for example. It also includes historical and natural heritage, such as human remains, natural features of the landscape, and indigenous plant and animal species with which a people has traditionally been associated*".[270]

---

[268] Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, Article 1.
[269] ICRC, Commentary to Additional Protocol II to the Geneva Conventions of 1949, 1998, par. 4839. Cited by the SRVR in paragraph 1776 of the ADHC of Case 02.
[270] Erica-Irene Daes, "Study on the protection of the cultural and intellectual property of indigenous peoples", 1993, E/CN.4/Sub.2/1993/28, par. Cited by the SRVR in paragraph 1777 of the ADHC of Case 02.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

The war crime of destruction of cultural property, as already mentioned, has its origin in the 1954 Hague Convention[271] . Article 15 of the Second Additional Protocol to that Convention, which is applicable in internal armed conflicts, establishes that it shall be a grave breach:

1. Any person commits an offence within the meaning of this Protocol if that person intentionally and in violation of the Convention or this Protocol commits any of the following acts:
   a) making cultural property under enhanced protection the object of attack;
   b) using cultural property under enhanced protection or its immediate surroundings in support of military action;
   c) extensive destruction or appropriation of cultural property protected under the Convention and this Protocol;
   d) making cultural property protected under the Convention and this Protocol the object of attack;
   e) theft, pillage or misappropriation of, or acts of vandalism directed against cultural property protected under the Convention.
2. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the offences set forth in this Article and to make such offences punishable by appropriate penalties. When doing so, Parties shall comply with general principles of law and international law, including the rules extending individual criminal responsibility to persons other than those who directly commit the act.".[272]

The second numeral of Article 15 is of particular relevance, taking into account the typification of these conducts in the Colombian penal code, in Articles 154 and 156.

VI. Relationship between enforced disappearance and environmental destruction

[271] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, para. 1349.2.4.
[272] Second Protocol to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 1999, Article 15.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

The victims recognized in the Special Jurisdiction for Peace have been clear in pointing out that there is a relationship between the enforced disappearance and the destruction of the environment.

In the second Decision of Determination of Facts of Case 05 of the Chamber of Recognition, especially in its chapter E 2.9, it is established that the disappearance of persons by burying them in reserve areas that constitute sacred sites may constitute a crime against the environment as a war crime and a crime against humanity.[273]

The Chamber of Recognition has already established that there is summary proof of this link, so through Decision No. 226 of 2023 it decided to recognize the Cauca River of Colombia as a subject of rights and a victim of the Colombian armed conflict.[274]

In Decision No. 001 of March 28, 2025, Chambers D and H of the Recognition Chamber of the SJP recalled that one of the main victimizing acts for which the Cauca River was accredited in Case 05[275] was the throwing of hundreds of corpses into the riverbed, turning it into a mass grave, affecting the water and the species that inhabit it and profoundly destroying the relationship of dozens of communities with nature.[276] The Chamber pointed out that within Case 5 multiple evidence has been collected that demonstrates that during the years 2000 to 2004 there was a systematic conduct by paramilitary groups and permitted by the Public Forces of murdering people and throwing them into the Cauca River so that they could never be found.

In the words of the victims accredited in the JEP, the armed actors "*used the Cauca River at Buenos Aires to perpetrate and hide their crimes, turning it into a large mass grave*.[277] The Cauca River was not only degraded and instrumentalized by the disappearance of

---

[273] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsection G, Decision No. 002 of 2024, p. 361 et seq.

[274] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Decision No. 226 of 2023 in Case 05. Available at: https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/1/1/Auto_SRVR-226_11-julio-2023.docx.

[275] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Acknowledgment of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Decision No. 226 of 2023 in Case 05.

[276] Special Jurisdiction for Peace, Chamber for the Recognition of Truth, Responsibility and Determination of Facts and Conduct, Subsections D and H, Decision No. 001 of 2025, para. 88 et seq.

[277] Report International Criminal Responsibility of the Security Forces in the Municipality of Buenos Aires, p. 215.

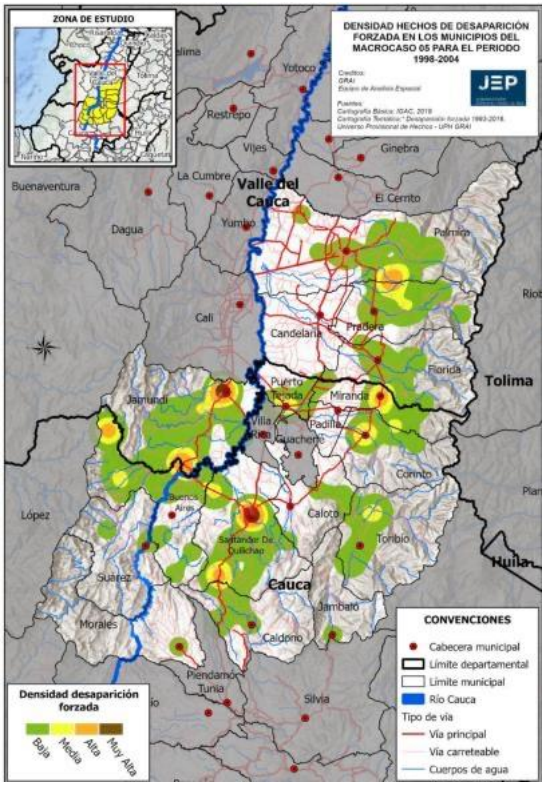
Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

human beings using its waters, but was also affected by other dynamics of violence such as illegal mining and drug distribution through the river. The communities of the municipalities of Buenos Aires and Suárez, in the department of Cauca, as well as the community of Jamundí, in the department of Valle del Cauca, were affected.

In the course of the investigation, the Information Analysis Group (GRAI – Grupo de Análisis de la Información) of the JEP delivered the "*Spatial analysis document based on the practice of participatory mapping on the phenomenon of forced disappearance in the municipalities of macro Case 05 that prioritizes the territorial situation in the region of northern Cauca and southern Valle del Cauca, for the years 1993-2016*". The report states that the period with the highest number of forced disappearances in the departments of Cauca and Valle del Cauca was 1998-2004 and corresponds with the entry of paramilitarism and the consolidation of the Calima Block of the AUC in the region especially in the head towns of Jamundí and Santander de Quilichao, as well as high density in Alto Naya, Timba, La Balsa, La Buitrera, the Mondomo-El Llanito road and Miranda. During this period there were 256 cases of enforced disappearances whose areas of occurrence are shown in the following maps:

Map 1. Enforced Disappearances, 1998-2004.

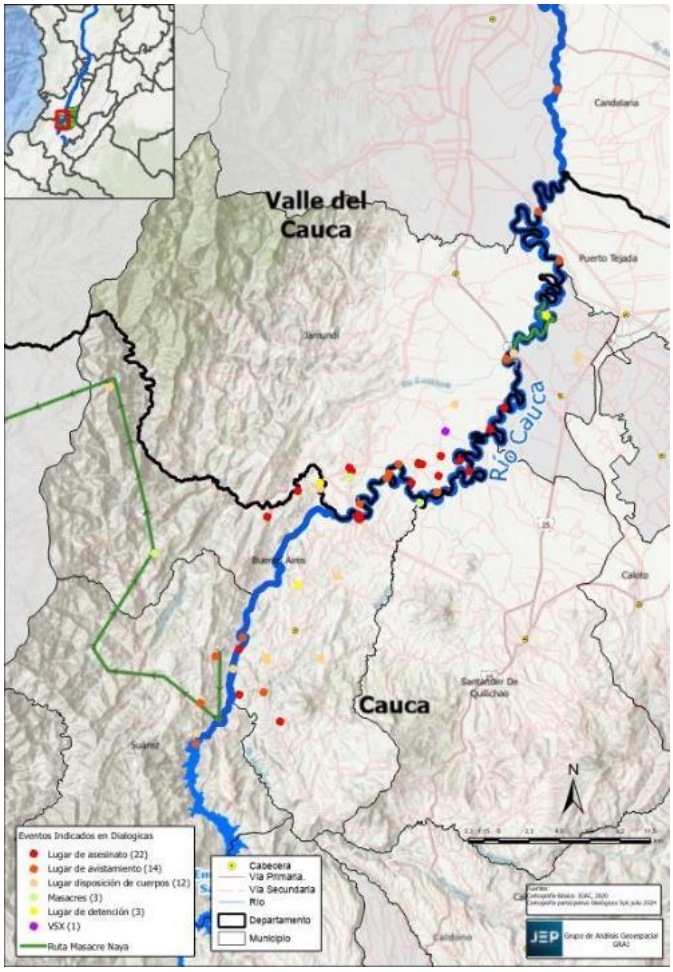
Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co



Source: Provisional Universe of Facts (UPH). Prepared by GRAI

Map 3. Classification of facts indicated in the dialogic proceedings of July 5 and 6, 2024.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co



Prepared by GRAI

The report also lists some places where the dumping of bodies in the Cauca River was concentrated. These were:

(vii) **La Balsa vehicular bridge**: This bridge crosses the Cauca River and connects the municipalities of Jamundí, in the department of Valle del Cauca, and Buenos Aires, in the department of Cauca. There the community used to see bodies of murdered people, even mutilated, and blood stains on the river;

(viii) **Mouth of the Timba River, where the Timba River flows into the Cauca River**: The report notes that Timba, and this region in general, witnessed countless atrocities, described in grisly practices such as torture and murder and deliberate abandonment of bodies in the river. Some corpses were thrown

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

to float downstream, in a macabre message of intimidation to the population, while others were embalmed with stones, hiding them completely.

(ix) **The Boom or Bum**: The GRAI report notes that in this place, the presence of whole bodies or dismembered parts floating in the river was a sadly recurring scene. The testimonies collected during this exercise, especially those of the boatmen who traveled these waters, reveal acts of bravery in the midst of the fear imposed by the illegal groups. These men, using rudimentary means, and when circumstances permitted, rescued the bodies of acquaintances, friends or members of their community. They used vines to tie up the bodies and keep them afloat near the shores, hoping that their families would come to recognize them and give them a dignified burial. Many others were simply set adrift, swept by the currents as anonymous witnesses to brutality.

(x) **La Curva del Muerto**: The GRAI report states that the civilian population changed the name of this place, previously known as Las Estrellas, due to the enforced disappearance of people. The water currents carried the remains of human bodies, human remains thrown and dragged down the river, victims of torture and murder who begged for mercy for their lives, as well as shot vehicles with people inside, which were abandoned adrift in the river's waters. The inhabitants of the region, terrified by the imminent risk, abandoned their homes and lands.

(xi) **Charco El Perro**: The GRAI report states that witnesses interviewed told them that armed groups took people to the banks of the river, where they subjected them to brutal torture and murder and then the bodies were thrown into the river. People were killed or even mutilated and thrown into the river.

(xii) **La Isla**: The GRAI report notes that La Isla is a natural formation characteristic of the river, whose appearance changes with the seasons. During the winter, the rising waters cover it completely, while in summer it emerges as a firm and fertile land, suitable even for agricultural and farming activities. The river's own dynamics allowed the bodies of the victims to be stranded among branches and sediments.

IV. Conclusion

The Chamber of Recognition has charged former FARC-EP combatants with the destruction of the environment, stating that this destruction can be a crime against humanity of other inhumane acts. The Chamber has also considered that the destruction of nature constitutes the war crimes typified in the Rome Statute of the International

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

Criminal Court in paragraphs (iv) and (xii) of Article 8(2)(e). The Recognition Chamber has also found that there is a link between enforced disappearance and the destruction of the environment, especially in those cases in which rivers are used to forcibly disappear people in the framework of the Colombian armed conflict.